

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL NARCOTRÁFICO....1

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL NARCOTRÁFICO EN
EL DEPARTAMENTO DEL META, PERIODO 2000-2015

YEISON ANDRÉS ÁVILA GUTIÉRREZ

SHIRLEY VIVIANA GONZÁLEZ CUENCA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ECONOMÍA

VILLAVICENCIO

META

2017

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL NARCOTRÁFICO....2

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL NARCOTRÁFICO EN
EL DEPARTAMENTO DEL META, PERIODO 2000-2015

YEISON ANDRÉS ÁVILA GUTIERREZ

SHIRLEY VIVIANA GONZÁLEZ CUENCA

Trabajo de grado para optar el título de Economista

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

OMAR REY ANACONA

Economista

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ECONOMÍA

VILLAVICENCIO

META

2017

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
CAPITULO I	13
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	13
1.1. ANTECEDENTES	13
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	17
2. OBJETIVOS	18
2.1. OBJETIVO GENERAL	18
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18
CAPITULO II	19
3. MARCO DE REFERENCIA	19
3.1. MARCO TEÓRICO	19
3.1.1. Teoría económica de los bienes ilegales: El caso de las drogas	19
3.1.2. Teoría de las redes del narcotráfico y sus interacciones	20
3.1.3. Recuento histórico de la producción de coca en Colombia y sus determinantes	22
3.1.3.1. Hectáreas sembradas y producción de coca en Colombia	22
3.1.3.2. Determinantes de los cultivos	25
3.2. MARCO INSTITUCIONAL	26
3.2.1. El Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)	27
3.2.2. Ministerio de Defensa	27
3.2.3. Ministerio de Justicia y del Derecho	27

3.2.4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	27
3.2.5. Departamento de la Prosperidad Social (DPS)	27
3.2.6. Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF	28
3.2.7. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	28
3.2.8. Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial – UACT	28
3.2.9. La Fiscalía General de la Nación	28
3.2.10. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)	29
3.2.11. Consejos Seccionales de Estupefacientes	29
3.2.12. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	29
3.2.13. Policía Nacional	29
3.2.14. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	29
3.2.15. Defensoría del Pueblo Seccional Meta	29
3.2.16. Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Meta	30
3.2.17. Secretaria de Salud Departamental del Meta	30
3.3. MARCO LEGAL	30
3.4. MARCO CONCEPTUAL	32
CAPITULO III	36
4. METODOLOGÍA	36
4.1. ENFOQUE Y DISEÑO	36
4.2. FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA	
INFORMACIÓN	37
CAPITULO IV	38
5. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS	38
5.1. DINÁMICA DEL NARCOTRÁFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, PERIODO 2000-2015	38
5.2. EFECTOS SOCIALES DEL NARCOTRÁFICO EN EL META	44

5.3. EFECTOS ECONÓMICOS DEL NARCOTRÁFICO EN EL META	52
6. 1. RESULTADOS DIRECTOS E INDIRECTOS	58
6.1. IMPACTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	60
6.2. TRANSFERENCIA Y USO DEL CONOCIMIENTO	60
CONCLUSIONES	61
RECOMENDACIONES	65
REFERENCIAS	

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Cultivo de coca en el departamento del Meta, hectáreas sembradas, periodo 2000-2015	34
Figura 2. Cultivo de coca por municipios en el departamento del Meta, hectáreas sembradas, periodo 2001-2013	40
Figura 3. Producción por Tonelada Métrica de hoja de coca en el departamento del Meta, periodo 2005-2015	41
Figura 4. Comportamiento de los precios de la coca en el departamento del Meta, periodo 2000-2015	42
Figura 5. Comportamiento de los precios de los derivados de la coca en el departamento del Meta, periodo 2004-2015	43
Figura 6. Relación entre narcotráfico y acciones armadas de los grupos al margen de la ley en el departamento del Meta, periodo 2000-2015	45
Figura 7. Presencia frentes de las FARC y Autodefensas en municipios del departamento del Meta, año 2002	46
Figura 8. Presencia de frentes de las FARC y cultivos de coca en municipios del departamento del Meta, año 2014	46
Figura 9. Relación de los cultivos de coca y la fumigación aérea con el desplazamiento en el departamento del Meta, periodo 1999-2014	48
Figura 10. Índice de vulnerabilidad por ruralidad, capital humano y rasgos sociodemográficos en el departamento del Meta, año 2011	51
Figura 11. Evolución de los coeficientes GINI en el departamento del Meta, 2000 – 2009	53
Figura 12. Índices de Gini de propietarios y tierras a nivel municipal en el departamento del Meta, año 2009	54

Figura 13. PIB agrícola y hectáreas de coca sembradas en el departamento del Meta,
2000- 2015 55

Figura 14. Relación de hectáreas sembradas en cultivos de coca y hectáreas cosechadas
en cultivos permanentes y transitorios en el departamento del Meta, 2000-2014 56

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Municipios con mayor número de desplazamiento individual en el departamento del Meta, periodo 2000-2015	49
---	----

INTRODUCCIÓN

El narcotráfico no solo ha contribuido a fortalecer el conflicto armado, sino también ha generado un aumento significativo en la violencia y criminalidad, manifestada en unas mayores tasas de homicidios, de secuestro, de desplazamiento forzado, entre otras, así como en mayor desigualdad y pobreza; situaciones que se han constituido en una amenaza grave para las estructuras sociales, administrativas, políticas y económicas de las entidades territoriales.

La historia de la región del departamento del Meta se ha caracterizado no solo por la colonización agraria (década de los 50) y armada (década de los 60), sino también por una colonización cocalera, que se empezó a dar a partir de los años 80 y, posteriormente, se consolidó con la aparición de narcotraficantes y grupos de justicia privada, a partir de los 90 (PNUD, 2010).

En este sentido, el negocio de la coca ha significado el abandono del campo, unas relaciones económicas mediadas por ese producto, unos vínculos estrechos entre los grupos armados y esta economía ilegal, la llegada al territorio de nuevas fuerzas ilegales detrás del lucrativo negocio y que el Departamento se convirtiera en uno de los principales productores de hoja de coca en el país. Adicionalmente, significó que la economía de la droga permeara diferentes escenarios del Departamento y que se diera una disputa por el territorio y por las mejores tierras, que en su momento fueron de campesinos. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta disputa por el control político, económico y territorial de Meta, tanto de legales como de fuerzas ilegales, un papel primordial tuvo la economía de la coca, que se convirtió en motor de los conflictos social y armado y en la extensión e intensificación de los mismos

Bajo este contexto, es importante conocer los efectos o impactos económicos y sociales del narcotráfico durante el periodo 2000-2015, para que con base en este se puedan generar políticas públicas, programas y proyectos que garanticen el bienestar y la calidad de vida de la población Metense.

Para el presente trabajo, se determina que el enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo, ya que se pretende analizar y explicar los principales efectos económicos y sociales del narcotráfico en el departamento del Meta durante el periodo 2000-2015, utilizando

información estadística para genera un análisis que permita describir variables y comportamientos respecto al tema a tratar. Así mismo, la investigación es de tipo no experimental, de diseño trasversal descriptivo, ya que se indagan y se describen variables sobre los cultivos de coca, su producción potencial, los precios estimados en el mercado, el desplazamiento forzado, el empleo, la concentración y tenencia de la tierra y el accionar de los grupos armados ilegales.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es caracterizar la dinámica del narcotráfico y analizar los efectos económicos y sociales del mismo en el departamento del Meta, durante el periodo 2000-2015, en la perspectiva de proponer recomendaciones de política pública. En este sentido, se hizo necesario analizar la dinámica del narcotráfico, desde la perspectiva del área sembrada, la producción y los precios del cultivo de coca; analizar la relación existente entre el narcotráfico y variables como el desplazamiento forzado y la violencia manifestada esta en acciones de grupos armados al margen de la ley; y finalmente, vislumbrar los principales efectos económicos del narcotráfico en cuanto a la concentración de la propiedad rural, el empleo y la producción campesina en el departamento del Meta. Bajo este contexto, se encontró que los procesos de concentración de la tierra, conflictos sobre el uso del suelo, las transformaciones en la espacialidad y en el ordenamiento del territorio y la implementación de modelos de empresarización de la producción rural causados por el narcotráfico son correlativos al abandono o desplazamiento de la población y le cambio en la estructura productiva ya que estas termina siendo una estrategia en el marco de la guerra, orientada a la desterritorialización, la expansión de áreas de control y a la apropiación violenta de propiedades agrícolas.

Palabras clave: Narcotráfico, concentración de la propiedad rural, desplazamiento forzado, conflicto armado, producción campesina.

Abstract

The objective of the present work is characterize the dynamics of the drug trafficking and to analyze the economic and social effects of the same one in the department of the Goal, during the period 2000-2015, in the perspective to propose recommendations of public politics. In this sense, it became necessary to analyze the dynamics of the drug trafficking, from the perspective of the sowed area, the production and the prices of the cultivation of coca; to analyze the existing relation between the drug trafficking and variables like the forced displacement and the this shown violence in actions of groups armed to the margin of the law; and finally, to glimpse the main economic effects of the drug trafficking as for the concentration of the rural property, the employment and the rural production in the department of the Goal. Under this context, one found that the processes of concentration of the ground, conflicts on the use of the soil, the transformations in the Spatiality and in the arranging of the territory and the implementation of models of Business of the rural production caused by the drug trafficking are correlative to the abandonment or displacement of the population and changed to him in the productive structure since it finishes these being a strategy in the frame of the war, faced to the Deterritorialization, the expansion of areas of control and to the violent appropriation of agricultural properties

Keywords: Drug trafficking, concentration of the rural property, forced displacement, armed conflict, rural production.

CAPÍTULO I

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.ANTECEDENTES

El crecimiento del narcotráfico, es uno de los hechos más importantes de la historia de Colombia tanto social como económica y ha marcado en forma significativa el transcurrir de la sociedad colombiana con especial énfasis a partir del año de 1980. Al narcotráfico se atribuyen, en diversas medidas y con grados variables de exactitud, efectos de todo orden, siendo estos los efectos económicos, la violencia, la destrucción del sistema judicial, la impunidad habitual, la corrupción creciente, las disparidades sociales, y en general efectos sobre la distribución del poder (Melo, “s.f”).

En este sentido, el narcotráfico ha impuesto costos tanto económicos como sociales a nivel regional y nacional. Si bien durante los últimos años se han llevado a cabo algunas disertaciones para describir y cuantificar algunos de los costos, estos se ha hecho de manera separada, razón por la cual en el presente trabajo se expondrán algunos estudios realizados sobre los efectos o repercusiones económicas, institucionales y sociopolíticas ocasionadas por el tráfico de drogas en Colombia y en el departamento del Meta.

Según Llano, (2015) un primer grupo de trabajos exponen por medio de aportes teóricos, análisis de datos y estimaciones, los principales costos económicos que el tráfico de drogas ha generado en el país. Al respecto autores como: Thoumi, 1995; Sarmiento, 1990; Rocha, 2000; Rocha 2001; Ortiz 2009; Belzner y Rodríguez, 2010 y Rocha, 2011; señalan como efectos negativos, el desplazamiento de la economía ilegal, principalmente por el contrabando que compite de forma ilegal con la producción interna; la reducción de la inversión nacional y extranjera por la inestabilidad institucional y seguridad del país; la inversión de dineros provenientes del narcotráfico en sectores de baja productividad económica; apreciación del tipo de cambio real debido al mayor ingreso de divisas al país provenientes de las ganancias del narcotráfico; exceso en gasto en defensa y seguridad; dificultad para la aplicación de la política monetaria y efectos inflacionarios y finalmente aumento de la desigualdad debido a la distribución de los ingresos del narcotráfico.

Así mismo, los autores mencionados con anterioridad resaltan las repercusiones sociopolíticas del narcotráfico, y señalan que la violencia reflejada en el aumento de las tasas de homicidios, secuestros y desplazamiento, -cuyas manifestaciones se intensificaron gracias al vínculo estrecho entre el narcotráfico y los grupos armados ilegales- han sido los principales efectos sociales del tráfico de drogas. Los autores explican que estas y otras manifestaciones de violencia, desincentivan la inversión y destruyen el capital físico y humano afectando el desarrollo económico. En el ámbito político, los autores mencionan la desestabilización política, el deterioro institucional, el debilitamiento del sistema judicial, la corrupción, entre otras como los costos más preponderantes del narcotráfico.

De otro lado, Quino y Arcila (2004) y Urrutia (1990), describen de manera más detallada los efectos del narcotráfico en algunos sectores de la economía. Al respecto Urrutia (1990), plantea que la industria de drogas ilícitas tiene efectos negativos en el crecimiento económico. El carácter pro cíclico del retorno de capitales dificulta el cumplimiento del control de la inflación, el manejo monetario y el incremento en la demanda de bienes no transables. El contrabando, además, desestimuló la industrialización y la generación de exportaciones, pues la mayoría de utilidades del narcotráfico que reingresan al país lo hacen en forma de contrabando. Es decir, el narcotráfico tiene un impacto reducido sobre la demanda agregada, y por lo tanto no estimula el crecimiento del producto interno bruto y en cambio produce una especie de “dumping” por dos vías: mantiene actividades ineficientes de forma artificial y fomenta importaciones en un país protegido. Ambas cosas son factores de crisis para los productores nacionales.

Por su parte Quino y Arcila (2004) indican que la estructura de la propiedad industrial y financiera está altamente concentrada en manos de una docena de conglomerados empresariales, lo cual genera mayores obstáculos para que el narcotráfico influya en estos sectores de la economía. Por otra parte, el narcotráfico ha tenido efectos negativos sobre el sector rural e informal del país, dada la deficiente titulación de la propiedad rural, los atrasados sistemas de registro, la inversión en tierras para la ganadería extensiva y el incentivo de la ilegalidad.

En cuanto a los costos sociales, los autores mencionan que el impacto en este aspecto ha sido grande y complejo, pues la excesiva acumulación de riqueza ha determinado un crecimiento informal y un deterioro institucional a través de la creciente corrupción y violencia, acelerando la deslegitimación del Estado.

Específicamente para el departamento del Meta, Gutiérrez, (2005) al analizar el desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta durante el periodo 1982-2004, intenta establecer relaciones entre las actividades económicas ilícitas vinculadas a la producción y comercialización de base de coca con distintos fenómenos políticos y sociales vividos en las últimas tres décadas en siete municipios del Meta: La Macarena, Vistahermosa, La Uribe, Mesetas, Puerto Rico, Puerto Concordia y Mapiripán. En este sentido, el autor construye, desde un enfoque teórico de economía política, la configuración social del espacio y la formación del Estado en los niveles local y nacional e indica la manera en que la economía ilícita ha impactado las formas y características de organización social y política de los pobladores. Así como los importantes excedentes económicos generados por los cultivos de coca, los cuales han afectado la distribución del poder político local y regional.

Finalmente, el PNUD (2010), en su informe del “Meta: Análisis de la conflictividad” presenta las causas estructurales y coyunturales de la violencia, entre las que destaca la colonización armada y cocalera; el boom de narcotráfico y las autodefensas; la situación actual y dinámica social, económica, política y de gobernabilidad en el departamento; el impacto del conflicto armado y señala los posibles escenarios y caminos a seguir para construcción de paz en el departamento del Meta.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante varias décadas el narcotráfico en el mundo y especialmente en Colombia ha prosperado de manera constante y a su vez se ha convertido en una gran problemática que ha afectado el desarrollo normal del país; las actividades que genera esta problemática social no se presentan solamente en los países productores sino también en los consumidores por los cuales se emplean rutas para el comercio de este producto; de esta forma el narcotráfico es una actividad de carácter mundial por todas las cadenas que se involucran desde su proceso de cultivo hasta llegar a su consumo final (Prades, 2015).

Existe evidencia de que los cultivos de coca están fuertemente asociados a la financiación de los grupos armados ilegales. A falta de una fuente de financiación foránea los grupos

irregulares deben operar algún tipo de actividad económica en la que estos grupos sean competitivos. En la mayoría de los casos la mencionada actividad se sustenta en la depredación o extorsión de recursos económicos –en particular bienes primarios– a través del uso selectivo o indiscriminado de la violencia (Días y Sánchez, 2004). El dominio o control por parte de los grupos irregulares de los territorios donde se producen la coca conlleva la utilización de la violencia y la intimidación sobre las comunidades donde se quiere ejercer el control territorial. Sin embargo, los cultivos de coca no constituyen una actividad de depredación como tal, pues en su producción hay creación de valor agregado, existe un mercado para el producto –con algún grado de intervención por parte de los irregulares, y es un insumo para la fabricación de drogas psicoactivas (Días y Sánchez, 2004).

En este sentido, y en concordancia con los autores antes mencionados, el narcotráfico no solo ha contribuido a fortalecer el conflicto armado, sino también ha generado un aumento significativo en la violencia y criminalidad, manifestada en mayores tasas de homicidios, de secuestro, de desplazamiento forzado, entre otras, así como en mayor desigualdad y pobreza; situaciones que se han constituido en una amenaza grave para las estructuras sociales, administrativas, políticas y económicas de las entidades territoriales.

De otro lado, el narcotráfico ha estado relacionado positivamente con la presencia de guerrilla y grupos paramilitares, con el nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI), con características geográficas como los recursos hídricos y con la erradicación. Aspectos de los cuales, el departamento del Meta no es ajeno, por el contrario, dada su importancia, el Departamento ha sido una zona en disputa de diferentes actores armados al margen de la ley, cuyo actuar, no solo ha producido una cultura ilícita – dada la presencia de cultivos ilícitos en el territorio, específicamente en la región del Ariari-, sino también ha ocasionado un impacto en la estructura productiva, incidiendo de esta manera en los aspectos económicos y sociales de la región.

Por otra parte, el Meta presenta las condiciones propicias para ser una zona receptora de efectos o costos derivados del narcotráfico, pues ha sido de particular importancia para las FARC por su larga tradición en la región, por las bases sociales con las que ha contado y por ser una zona para el desarrollo de economías ilícitas basadas en el cultivo de coca y tráfico de armas y drogas. En los últimos años, la presencia de las FARC se ha hecho visible en dos regiones del

Meta principalmente. Por una parte, se encuentra la tradicional región del Ariari, donde se ha concentrado el 91,2% del total de acciones armadas guerrilleras del departamento y por otra, la actividad de las FARC también ha sido visible en el suroriente de la región del Ariari, en municipios como Puerto Rico, Puerto Concordia, Vistahermosa y el municipio de Mapiripán (Fundación Ideas para la Paz FIP, 2013).

Adicionalmente, las dinámicas que se han venido generando en la región alrededor de cultivos como palma y la caña para la producción de biocombustibles y etanol y el aumento para tal fin de la explotación de la tierra por parte de grandes empresarios y de compañías internacionales, han venido gestando un complejo escenario social y económico en el Meta; ya que por un lado, las poblaciones de económica campesina han tenido que reducir la producción de sus cultivos para sembrar productos de mayor rentabilidad que les permita estar inmersos en las nueva dinámica económica del departamento; y por otro, los grandes cultivadores de palma y caña se han visto sometidos al pago frecuente de extorciones o “vacunas” a grupos armados ilegales para poder efectuar su labor productiva.

Así mismo, el departamento tiene una débil presencia institucional, una geografía particular, una infraestructura precaria principalmente en zonas apartadas, una poca densidad poblacional en las áreas rurales, grandes diferencias en torno a la tenencia, distribución y uso de la propiedad rural, una precariedad en el empleo, un cambio en la dinámica productiva del campesinado y niveles importantes de violencia y desplazamiento forzado. Bajo esta premisa, el narcotráfico ocasiona unos efectos o impactos negativos, los cuales se profundizan si se tiene en cuenta el control económico y político que pueden ejercer las FARC y otros grupos al margen de la ley; las características económicas del departamento, de esencia agrícola y ganadera; su estructura social, de población rural y su composición geográfica, de zonas apartadas y de difícil acceso.

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta el anterior contexto se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron los principales efectos económicos y sociales del narcotráfico en el departamento del Meta, durante el periodo 2000-2015, que permita identificar recomendaciones de política pública para su solución?

2. OBJETIVOS

2.1.OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la dinámica del narcotráfico y analizar los efectos económicos y sociales del mismo en el departamento del Meta, durante el periodo 2000-2015, en la perspectiva de proponer recomendaciones de política pública.

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la dinámica del narcotráfico en el departamento del Meta, desde la perspectiva del área sembrada, la producción y los precios del cultivo de coca, durante el periodo 2000-2015.
- Analizar la relación existente entre el narcotráfico y variables como el desplazamiento forzado y la violencia manifestada esta en acciones de grupos armados al margen de la ley.
- Vislumbrar los principales efectos económicos del narcotráfico en cuanto a la concentración de la propiedad rural, el empleo y la producción campesina en el departamento del Meta.
- Presentar algunas recomendaciones relacionadas con reducir el impacto negativo del narcotráfico en el departamento del Meta.

CAPÍTULO II

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. MARCO TEÓRICO

Al abordar la literatura económica se encuentra que mucho se ha hablado sobre los mercados ilegales y, en particular sobre el narcotráfico, en cuanto a la riqueza y diversidad de los enfoques y modelos utilizados para comprender los procesos de mercado de este tipo de actividades ilegales. Sin embargo, en el presente trabajo se tendrá en cuenta en términos generales, las posturas conceptuales y teóricas desarrolladas por Becker, Murphy y Grossman, 2004 en la teoría económica de los bienes ilegales así como lo establecido en la teoría de las redes del narcotráfico y sus interacciones, donde se realiza un breve análisis de las redes de vínculos sociales que forman la base estructural del narcotráfico y sus interacciones estratégicas. Así mismo, se realizará un recuento histórico de la producción de coca en Colombia y los principales determinantes de los cultivos de coca en el país.

3.1.1. Teoría económica de los bienes ilegales: El caso de las drogas

En “La Teoría Económica de los Bienes Ilegales: El caso de las drogas” Becker, Murphy y Grossman, (2004) evalúan la actual estrategia de lucha contra las drogas que consiste en declarar ilegal la producción de estupefacientes y penalizar a quienes violan la ley, y la comparan con la posibilidad de permitir su producción y gravar su venta aplicando un impuesto elevado con el objetivo de reprimir su consumo.

A pesar de que la estrategia mencionada anteriormente tiene como fin último la disminución del consumo de drogas, el análisis muestra que los resultados son significativamente diferentes. La equivalencia usualmente aceptada entre la reducción de las cantidades a través de una contracción en la oferta y la imposición de impuesto falla en su totalidad cuando dicha reducción en las cantidades es inducida por la represión y el castigo.

Según los autores, la represión reduce el consumo elevando los costos de los proveedores debido a que se arriesgan al encarcelamiento; así, el incremento de los costos conlleva a precios más altos que inducen a menor consumo. Sin embargo, si la demanda es inelástica (como podría identificarse al mercado de drogas) mayores costos provocan precios más altos, y dado que la

demanda absorbe el cambio en el precio, finalmente se elevan los gastos en estos bienes ilegales. Por lo tanto, una represión que eleva el precio final y además implica un gasto gubernamental elevado (por descubrir a vendedores ocultos) significa un costo social mayor.

Asimismo, la legalización de las drogas, y la consecuente aplicación de un gravamen, no sufre del problema antes descrito y pueden ser más efectivos en la reducción del consumo, sin importar la elasticidad de la demanda. A pesar de que la legalización implicaría la existencia de un mercado negro que procura no pagar los impuestos, basta con que la represión eleve los costos de producción clandestina por encima del costo de producción legal para desalentar la producción ilegal.

Finalmente, Becker, Murphy y Grossman aseguran que siguiendo a la teoría de la represión, los inmensos beneficios que obtienen los proveedores que logran evitar la detección de los bienes ilícitos los dotan de recursos suficientes que explican la dificultad de la lucha contra las drogas, porque los narcotraficantes tienen recursos para corromper a funcionarios y en algunos casos a gobiernos, y porque los esfuerzos por reducir la oferta de droga conllevan una excesiva violencia y un empoderamiento exacerbado de los cárteles de droga.

3.1.2. Teoría de las redes del narcotráfico y sus interacciones

A diferencia de otras actividades económicas legales, el narcotráfico no sólo requiere el desarrollo de una tecnología de la producción y el tráfico de drogas que permita la elaboración de las mercancías. También requiere el desarrollo y funcionamiento de una tecnología para el conflicto y la corrupción, a través de la cual se puedan configurar sistemas de defensa y de apropiación por la fuerza de los recursos necesarios para el negocio, burlar la coerción gubernamental a través de la corrupción y el soborno, así como movilizar los excedentes del negocio y relocalizar la producción o redirigir el tráfico de las drogas cuando sea necesario.

Un análisis más realista debería partir de que los mercados ilegales son complejos. Su funcionamiento se puede comprender mejor si se parte de que toda la cadena de producción de estupefacientes opera a través de una serie de transacciones mercantiles y sociales en dos tipos de redes sociales que se traslapan y se complementan entre sí: las redes de producción, y tráfico de drogas, por una parte, y las redes de defensa y corrupción, por otra. Así mismo, el consumo de drogas parte de una red fija de consumidores adictos, que garantiza unos niveles mínimos de

consumo de los estupefacientes. Las redes de producción, y tráfico de drogas son la base estructural de la tecnología de producción y tráfico de drogas, mientras las redes de defensa y corrupción constituyen la base estructural de la tecnología para el conflicto y la corrupción (Raffo y Segura, 2015).

Las redes de primer tipo, son redes complejas y dinámicas con estructuras jerárquicas en las que la eliminación de nodos de cualquier jerarquía no es suficiente para desarticularlas. La irrupción de muchos carteles pequeños desde finales de los años noventa como resultado de la persecución, aniquilación o encarcelamiento de los grandes capos de los carteles, ha llevado a que dichas redes estén cada vez más interconectadas entre sí, configurándose estructuras semejantes a las de las redes de mundos pequeños (Salazar, 2010). Las redes de mundos pequeños se caracterizan porque cualquier par de nodos (agentes vinculados al negocio ilícito) puede conectarse rápidamente entre sí a través de un número de contactos que oscila entre 5 y 7. Estos nodos poseen dos características fundamentales: la primera, es que algunos nodos tienden a estar muy agrupados entre sí formando clusters. Y la segunda es que poseen longitudes de trayectorias mínimas entre nodos pequeños. Esta combinación estructural aparentemente contradictoria es posible por el hecho de que los clusters tienden a estar vinculados por personas que pertenecen al mismo tiempo a múltiples clusters.

Los narcotraficantes generalmente están conectados en diversas redes a la vez, lo que crea una gran movilidad en su estructura jerárquica, más ahora “cuando los ciclos de dominio de jefes de distinta importancia se han hecho cada vez más cortos, con procesos de aprendizaje que incluyen la negociación con Estados Unidos” (Salazar, 2010). Así un narcotraficante puede pertenecer a la vez a varias redes de producción, y tráfico de drogas y a varias redes de defensa y corrupción, de modo que existen procesos complementarios entre estos dos tipos de redes y entre diferentes redes de un mismo tipo. No obstante, también existe competencia entre las redes que pertenecen a un mismo tipo. En las redes del primer tipo existe competencia de tipo económico: Por un lado, los productores compiten en mercados conformados por numerosos cultivadores independientes de la coca, refinadores o comerciantes de la pasta de coca. Por otro lado, en el tráfico –refinación, transporte, distribución al por mayor y al por menor del producto, y lavado de activos– existe una competencia –casi siempre oligopólica (Cartay, 1994)– por obtener las mayores rentabilidades del negocio en la búsqueda de las redes que desembocan más

eficientemente en los mercados con mayores niveles de demanda. En las redes del segundo tipo (de defensa y corrupción) la competencia se da por el dominio de rutas, puestos políticos o información de carácter estratégico a través de la fuerza bélica, la corrupción o el crimen organizado y selectivo (Raffo y Segura, 2015).

3.1.3. Recuento histórico de la producción de coca en Colombia y sus determinantes

En Colombia el cultivo de la coca se insertó en la compleja y vasta dinámica de la colonización campesina y como resultado aceleró su dinámica temporal, produjo sinergias con la depredación ambiental y generó dinámicas de aglomeración y propagación. El resultante monocultivo cocalero y su interacción con la colonización explican en las áreas los fenómenos de inflexibilidad a la baja, rebote, contagio y aglomeración. La fase agrícola va hasta el beneficio de la cosecha, para reducir riesgos y costos de comercialización (Rocha, 2011).

La manufactura se basa en una tecnología simple y sin elevadas economías de escala para la extracción de cocaína, lo que le ha permitido flexibilidad, movilidad y una capacidad instalada superior a la demanda. Así, la cadena productiva del narcotráfico se ha caracterizado como una actividad económica con muy pocas barreras de acceso diferentes a las que impone el control del Estado, así como por la violencia y corrupción desplegadas por las organizaciones criminales. De allí que las fases de transformación y de distribución internacional tiendan a estar más integradas y con una reducida escala de operación.

3.1.3.1. Hectáreas sembradas y producción de coca en Colombia

La hoja de coca mezclada con un álcali, para liberar el alcaloide se consumía masticada desde épocas precolombinas con fines religiosos, terapéuticos y afrodisíacos, y popularmente como medio para mitigar la fatiga, el hambre, la sed y el dolor. Según diferentes crónicas históricas, esto ocurría entre los pobladores originales de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Chocó, los Santanderes y los de la Costa Atlántica (Díaz-Piedrahita, 1998).

A mediados del siglo pasado Colombia reportaba la producción de 198 toneladas de coca destinadas al consumo indígena, que equivaldrían actualmente a la producción de cien hectáreas, en un momento en que se registraba una producción mundial de cocaína de 2,1 toneladas. En

1952 se contabilizaron 767 hectáreas de coca establecidas en los departamentos de Cauca (367) y Huila (400), cuya producción se contrabandeaba entre las comunidades indígenas a pesar de su prohibición.

Para 1978 comienza en Colombia el auge del cultivo de coca en varias zonas del país, en un principio siguiendo los flujos de migración de la colonización de la frontera agrícola en zonas ambientales frágiles y con precaria presencia del Estado, tal como se hizo evidente en Putumayo (Ramírez, 2001, p. 72). Desde entonces la coca experimentó un crecimiento vertiginoso y una propagación a territorios no tradicionales. De 2.500 hectáreas en 1981 se pasó a 180.000 en 1990, con reportes para 195 municipios de los 1.102 que en total está dividido política y administrativamente el país (UNODC, 1989, p. 2).

En Colombia la coca se ha establecido en suelos con precario balance ambiental comprendidos hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar, con un requerimiento de lluvias de entre 457 y 1.062 milímetros anuales, así como de acceso a la red fluvial para atender la poscosecha (Rocha y Ramírez, 2005, p. 18), aunque recientemente se tiene conocimiento de que dichos rangos se han ampliado. De acuerdo con lo anterior, la coca eventualmente podría cultivarse en sectores de 488 municipios colombianos, si bien en la práctica ello se realiza en menos de la mitad. La coca es un arbusto de ciclo permanente, el cual arroja su primera cosecha tras un año de haber sido trasplantadas las estacas del semillero. Luego, dependiendo de los cuidados, la genética y las condiciones ambientales, el cultivo permite entre dos y seis cosechas anuales, durante un ciclo productivo que alcanza su punto óptimo al cabo de tres años, sin mediar su abandono, los ataques de plagas y hongos, la aspersión aérea y la erradicación manual (UNODC, 2006, p. 5).

Las 68.000 hectáreas de coca detectadas en 2009 equivalían al 0,1% del territorio nacional (IGAC, 2002, cap. 3), que en principio se podrían considerar como una magnitud poco significativa. Sin embargo, su dispersión y movilidad señalan lo contrario. Entre 2001 y 2006 cerca de 409.000 hectáreas en algún momento fueron sembradas con coca y, si se trazara un radio de un kilómetro en torno a cada lote, el área de influencia se elevaría a 12,4 millones de hectáreas (UNODC, 2008, p. 4) y, por consiguiente, su campo de acción se elevaría a una décima parte del área continental del país.

El comportamiento de la productividad durante el transcurso de las últimas dos décadas estaría reflejando la historia de la introducción de un nuevo cultivo en territorios de precario balance ambiental. Una vez surtida la etapa de aclimatación de las variedades foráneas de coca, los rendimientos de hoja aumentaron gracias a las mejoras en la tecnología, principalmente en la selección de variedades, la optimación de actividades agro culturales, el reciclaje de insumos y su producción artesanal como respuesta a las dificultades en el aprovisionamiento, además del zoqueo (poda) de cultivos debido a la aspersión y el replanteo de lotes por causa de la erradicación manual. Recientemente, la menor disponibilidad de insumos y la creciente acción estatal se han traducido en menores áreas sembradas y el repliegue de las productividades a los niveles de principios de la década (Rocha, 2011).

A escala regional las productividades presentan notorios cambios y disparidades regionales. En el pasado, las encuestas patrocinadas por el Gobierno de Estados Unidos han comprendido Putumayo, Meta, Guaviare y el sur de Bolívar. Por su parte, recientemente la DNE y el SIMCI han realizado encuestas para la Sierra Nevada (Magdalena-Guajira), el Magdalena medio (Bolívar, Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca), el nororiente (Norte de Santander, Arauca) y el Pacífico (Nariño y Cauca). La productividad por hectárea de hoja de coca se estimaba a principios de los años noventa en 0,8 toneladas, luego estudios patrocinados por el Gobierno de Estados Unidos arrojaron la cifra de 2,2 toneladas para 1997 (Rocha, 2011) y para 2002 se reportaron 4,6 toneladas (DNE, 2001, p. 18). En 2005 las investigaciones realizadas por el SIMCI (UNODC, 2006, p. 12) determinaron que los rendimientos se habían elevado a 6,4 toneladas y que luego habían descendido en 2009 a 4,4 toneladas (UNODC, 2010, p. 43).

Entre 2005 y 2009 los cultivos de coca en el Pacífico no solo aumentaron su área sino también su rendimiento, de 2,6 a 3,8 toneladas por hectárea (UNODC, 2010, p. 40), lo que ofrece un claro contraste con el resto del país, donde han cambiado adversamente las condiciones para los cultivos de coca; por ejemplo, Meta y Guaviare redujeron su rendimiento de 9,9 a 5,1 toneladas.

3.1.3.2.Determinantes de los cultivos

En la escala regional, en Colombia la coca se ha establecido en municipios marginados del progreso y del control del Estado. Este cultivo ha vinculado a los agricultores más vulnerables por su pobreza y raíces en la colonización, ha sido promocionado mediante incentivos e intimidación por parte de grupos mafiosos y de extrema ideología y ha producido sinergias con enclaves de explotación descontrolada de recursos naturales (Rocha, 2011).

Esto ha dado lugar a dinámicas características de las bonanzas de los enclaves económicos: aislamiento geográfico, intensos flujos migratorios, elevados ingresos, consumo suntuario, bajo ahorro/ inversión, carestía, depredación ambiental, presencia de crimen organizado y grupos de ideologías extremas, alta criminalidad, inestabilidad sociopolítica, debilidad institucional, frágiles eslabonamientos económicos e irradiación de externalidades negativas.

Son numerosas las coincidencias entre la coca y la explotación de recursos naturales, como por ejemplo la minería del oro en el sur de Bolívar, la producción de esmeraldas en Boyacá, la explotación del petróleo en el Putumayo y la silvicultura en la Orinoquía y el Pacífico. Allí la coca se complementa con la actividad económica central, vincula los principales recursos locales y los hace económicamente dependientes, con las vulnerabilidades inherentes al monocultivo. Por consiguiente, cuando la producción de coca es afectada adversamente por las autoridades o una plaga, la población rápidamente transita hacia unas precarias condiciones de vida y llega a sufrir hambruna y desplazamiento geográfico, entre otras calamidades (Rocha y Ramírez, 2005, p. 50). Paradójicamente, las adversas condiciones arriba descritas favorecen que los cultivos de coca coincidan con áreas ambientalmente frágiles y suelos poco aptos para la explotación económica convencional.

La cosecha de la coca tiene relativamente asegurado su acopio en finca, a diferencia de la producción lícita, la cual transita distancias a su mercado inmediato que promedian entre los noventa y cien kilómetros, con deficiencias en infraestructura y a través del transporte animal (UNODC, 2008, p. 45), lo que desfavorece la comercialización y de paso motiva el monocultivo de coca.

En consecuencia, no resulta sorprendente que cuando se examinan los patrones regionales, se puede constatar que el área de coca resulta mayor en aquellos departamentos donde coinciden unos estándares de vida más bajos y hay un menor desarrollo agrícola. En efecto, durante las últimas dos décadas la mayor parte de la coca se ha reportado donde el bienestar de la población reflejado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) —un indicador compuesto por la expectativa de vida, la cobertura en educación y el ingreso— se encuentra por debajo del promedio nacional, o donde ocurre otro tanto con la importancia de la agricultura. Irónicamente, una explicación de la ventaja comparativa de la coca radica en varios de los determinantes que inhiben el desarrollo de la economía agrícola y del mejoramiento del bienestar de los habitantes rurales en zonas de frontera agrícola.

En Colombia, al igual que en Perú y Bolivia, la coca tiene el atractivo de generación de ingresos y el acceso al crédito extra bancario del que usualmente carecen los cultivos para consumo familiar básico. Los ingresos obtenidos de la coca han sido una motivación importante, frente a las grandes dificultades que tiene la economía de la colonización por la precaria infraestructura, las dificultades de comercialización y los elevados costos de transporte. El precio de la base de coca usualmente se ha situado muy por encima de otros productos agrícolas (Rocha y Ramírez, 2005, p. 58), pero durante la primera mitad de los años noventa su valor disminuyó en términos reales en un 50%, como resultado de la sustitución de importaciones de base mediante la expansión de cultivos locales; no obstante, desde entonces el precio ha recuperado terreno de manera irregular.

3.2.MARCO INSTITUCIONAL

En Colombia los organismos y/o instituciones que intervienen en el desarrollo de las políticas públicas dirigidas a la lucha contra el narcotráfico y en la atención de la población vulnerable involucrada y víctima del mismo; así como de la coordinación, formulación y adopción de planes, programas, estrategias y proyectos dirigidos a la mitigación de los efectos del narcotráfico son:

3.2.1. El Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)

El FNE tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación, la exportación, la distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial y las demás disposiciones que expida el Ministerio de la Protección Social, así como apoyar a los programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno Nacional.

3.2.2. Ministerio de Defensa

Contribuye a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas.

3.2.3. Ministerio de Justicia y del Derecho

El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Política Contra las Drogas, es el encargado evaluar, formular y coordinar la implementación de la política contra las drogas y contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así mismo, brinda asistencia técnica para la formulación, implementación y seguimiento de planes departamentales de drogas y apoya el funcionamiento de los Consejos Seccionales de Estupefacientes (CSE).

3.2.4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Además participa en la formulación del Plan de Acción Integral de Lucha contra el Narcotráfico con instrumentos de política pública, en donde se incentivan las Alianzas Productivas como estrategia clave de generación de ingresos en las zonas que más han sufrido el conflicto armado y el narcotráfico.

3.2.5. Departamento de la Prosperidad Social (DPS)

El DPS a través de los diferentes programas, planes y proyectos busca avanzar en la superación de la pobreza, la inclusión de la población vulnerable y víctima de la violencia, y la consolidación de los territorios a través de la garantía de la presencia del Estado en una senda de prosperidad y reconciliación.

3.2.6. Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF

La UIAF es la unidad de inteligencia financiera y económica del país y su misión se centra en proteger la defensa y seguridad nacional en el ámbito económico, mediante inteligencia estratégica y operativa sustentada en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los Derechos Fundamentales, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, con el objeto de prevenir y detectar actividades asociadas con los delitos de Lavado de Activos, sus delitos fuente, la Financiación del Terrorismo y proveer información útil en las Acciones de Extinción de Dominio.

3.2.7. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas es una entidad Adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia administrativa, cuyo objetivo central es servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojado y llevar el Registro Único de Tierras Despojadas. La Unidad será la encargada de diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en donde además del predio, se inscribirán las personas sujeto de restitución, su relación jurídica con la tierra y su núcleo familiar.

3.2.8. Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial - UACT

La UACT coordina y moviliza la institucionalidad estatal, el sector privado y la cooperación internacional, así como la ejecución de recursos de inversión en las regiones de consolidación focalizadas y en las zonas con presencia de cultivos ilícitos para cumplir los objetivos de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. La UACT hace parte del Sector de Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

3.2.9. La Fiscalía General de la Nación

Ejerce la acción penal y participa en el diseño de la política criminal del Estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

3.2.10. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) brinda servicios de monitoreo y evaluación independiente para el programa Desarrollo Alternativo de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) del Departamento de la Prosperidad Social.

3.2.11. Consejos Seccionales de Estupefacientes

Los Consejos Seccionales de Estupefacientes se establecen en todos los Departamentos y son los encargados de: velar porque a nivel seccional se cumplan las políticas, planes y programas trazados por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), formular para su adopción por el Gobierno Seccional, los planes y programas que deban ejecutarse a nivel regional, de conformidad con las políticas trazadas por el CNE, señalar a los distintos organismos locales las campañas y acciones que cada uno de ellos debe adelantar, y mantener contactos con los demás Consejos Seccionales de Estupefacientes para lograr una actividad coordinada.

3.2.12. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Es la entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. El ICBF brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos.

3.2.13. Policía Nacional

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. (Art 218 CPC).

3.2.14. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Es la entidad responsable de garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oficial básica en Colombia.

3.2.15. Defensoría del Pueblo Seccional Meta

La Defensoría del Pueblo diseñará y ejecutará programas de divulgación y promoción de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

3.2.16. Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Meta

La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Meta tiene como misión garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana del departamento, mediante la formulación y ejecución de planes, programas, proyectos y acciones en relación con seguridad, orden público, protección del espacio público, protección al consumidor, resolución pacífica de conflictos, prevención y atención de desastres, ejercicio de las facultades y atribuciones de policía, prevención, educación y protección a la familia y apoyo a los organismos de seguridad y justicia.

3.2.17. Secretaria de Salud Departamental del Meta

Esta entidad es la encargada de atender de manera prioritaria las demandas que efectúe la población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo económico del departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo a las políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social.

3.3.MARCO LEGAL

En materia legislativa el Estado colombiano cuenta con un andamiaje jurídico para enfrentar el problema mundial de drogas, el cual ha venido evolucionando conforme a su dinámica. En este sentido, el presente trabajo se ampara en lo establecido en la normatividad colombiana, para regular lo referente al consumo, producción y tráfico de estupefacientes.

Una primera etapa de esta normatividad arranca con la Ley 11 de 1920 y la Ley 118 de 1928 mediante las cuales se reguló de manera general la importación y venta de drogas que generan hábito pernicioso. Se establecieron entonces algunas formas de control sobre la producción y el tráfico de estupefacientes. Para 1930 el Decreto 1377 prohibió la importación y venta de marihuana y el Código Penal de 1936 consagró como conductas penalmente sancionables la elaboración, distribución, venta o suministro de sustancias narcóticas, su conservación para los mismos fines y la destinación de locales para el uso de drogas o

estupefacientes, al igual que el permiso, en ellos, para su uso. Diez años más tarde, la Ley 45 de 1946 modificó el Código Penal para cambiar la expresión sustancias narcóticas por drogas estupefacientes, proceso legislativo que continuó con la expedición de una serie de normas que modificaban, complementaban y adicionaban aquel régimen.

Posteriormente con el Decreto 1188 de 1974 se crea el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, como resultado de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional por la Ley 17 de 1973. A estos estatutos se añade una serie de normas complementarias que buscaron fortalecer la abierta lucha contra las drogas ilegales.

Por otra parte, con la Ley 30 de 1986 se crea el nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes y demás normas que lo complementan, modifican y adicionan. Otras normas importantes en el contexto de la lucha contra el narcotráfico están contenidas en las que dieron cuerpo a la Fiscalía General de la Nación, en el Código de Procedimiento Penal, en la Ley 333 de 1996. Dentro de las herramientas normativas cabe señalar que en los años 90 aparece una gran innovación normativa con la expedición de la Ley 333 de 1996, conocida como Ley de Extinción de Dominio, la cual se erige como un ataque directo a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes, horadando los emporios económicos contruidos por esta clase de crimen organizado y tocando la fibra que mayor menoscabo produce en este tipo de organizaciones criminales.

Así mismo, se crea El Consejo Nacional de Estupefacientes mediante el Decreto 1206 de 1973 como órgano asesor del Gobierno Nacional, encargado de recomendar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos que las entidades públicas y privadas deben adelantar en la lucha contra el fenómeno de la droga en sus diferentes manifestaciones: producción, tráfico y consumo.

Como una estrategia para fortalecer la lucha antidrogas en el país y con el fin de coordinar el desarrollo y ejecución de las políticas del Gobierno Nacional en materia de control, prevención y represión de estupefacientes, se creó la Dirección Nacional de Estupefacientes mediante el Decreto 494 de 1990, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2272 de 1991.

Recientemente se han dado algunas modificaciones a dicha Ley, entre las cuales están, la Ley 1330 de 2009, que estableció un trámite abreviado para aquellas personas que colaboren con la justicia y acepten que los bienes perseguidos o denunciados están inmersos en las causales de extinción del derecho de dominio y la Ley 1395 de 2010, por la cual adoptaron mecanismos de descongestión judicial, se reformaron y adicionaron algunos artículos para imprimir celeridad a los procesos y se destacó el otorgamiento de facultades de poder de policía administrativa al Subdirector Jurídico de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para poder recuperar los bienes incautados y extinguidos que estén a cargo de la Entidad.

Otras normas de gran importancia en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, están contenidas en la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), la Ley 785 de 2002 por la cual se dictan normas relacionadas con la administración de bienes incautados y la Ley 1453 de 2011 (Ley de Seguridad Ciudadana). Así como el Acto legislativo 01 de 2012, conocido como el marco jurídico para la paz, en este se permite crear las herramientas constitucionales para lograr una salida negociada del conflicto armado en Colombia.

3.4.MARCO CONCEPTUAL

➤ Narcotráfico

El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso (que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta) suele ser realizado por diversas organizaciones ilícitas (denominadas carteles) que se especializan en distintas partes de la cadena.

➤ Alucinógenos

Se llama alucinógenos a cierto tipo de drogas que, en dosis no tóxicas, causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad del consumidor.

➤ Migración

El movimiento de personas a través de una división política para establecer una nueva residencia permanente.

➤ Migración económica

Este desplazamiento se da en busca de mejores ingresos económicos, relacionado con el deterioro de las economías y el nivel de vida de los países en desarrollo. Es de resaltar que esta migración se hace de manera voluntaria.

➤ Desplazamiento forzado por la violencia

Es la acción llevada a cabo por una o varias personas, las cuales deben huir de su lugar de origen o de donde tienen fijada su residencia habitual, con el fin de evitar las consecuencias de un conflicto armado. El desplazamiento forzado por la violencia, tal y como su nombre lo indica, presenta dos factores que lo hacen inconfundible, estos factores son: Primero: la presión ejercida por grupos violentos, ya sea por los actores de un conflicto armado o por la delincuencia común u organizada; Segundo: el traslado del lugar habitual donde una persona o un grupo de personas tienen fijada su residencia habitual.

➤ Propiedad rural

La propiedad inmueble rural es el predio destinado a la producción agrícola ganadera, que tiene importancia económica para el productor pero que a su vez interesa a la comunidad en general.

➤ Conflicto armado

Es la confrontación entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente.

➤ Despojo

Es una acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas.

➤ Tenencia de la tierra

Derecho o derechos sobre un recurso, en este caso la tierra.

➤ Postconflicto

Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Así mismo, es entendido como el periodo de tiempo en el que fortalece y solidifica la paz, con el fin de evitar una recaída en el conflicto.

➤ Hoja de coca

La hoja de coca es un arbusto tropical de tronco delgado, hojas pequeñas, de color verde claro, flores blanquecinas, cuyas hojas se usan como infusión y de la cual se extrae la cocaína.

➤ Pasta de Coca

Es la cocaína no tratada, extraída de las hojas de coca a través de un proceso de maceración y mezcla con solventes tales como parafina, bencina, éter, ácido sulfúrico, entre otros.

➤ Economía campesina

Subsector de la actividad agropecuaria que se desarrolla por unidades de tipo familiar, con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo.

➤ Campesino

Un campesino es aquella persona que desempeña sus labores en el ámbito rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderas que tienen como principal objetivo la producción de diversos tipos de alimentos o sus derivados.

➤ Producción campesina

Es una forma de producción familiar que utiliza productivamente el conjunto de la fuerza de trabajo doméstica y los recursos naturales, sociales y financieros, para garantizar, tanto la subsistencia de la unidad familiar, como también el mejoramiento de su calidad de vida.

➤ Violencia

Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo.

➤ Hectárea

La hectárea es la superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado (10.000 m²). Se utiliza para medir superficies rurales, bosques, plantaciones y demás extensiones de terrenos naturales.

➤ Grupos Armados al margen de la Ley

El concepto de grupo armado al margen de la ley, está dado por el artículo primero de la ley 975 de 2005, en la que se estipula: Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades.

CAPITULO III

4. METODOLOGÍA

El presente trabajo tiene como base la información recopilada sobre la dinámica del narcotráfico en el departamento del Meta durante el periodo 2000-2015, analizado a través de los cultivos de coca, su producción y los precios en el mercado. De otro lado, también tiene como base información relacionada con el desplazamiento forzado, el empleo, la concentración de la propiedad, el accionar de los grupos armados ilegales y la producción rural. Esta información, una vez clasificada y analizadas para el propósito del presente estudio, permitirá llevar a cabo un informe sobre los principales efectos económicos y sociales del narcotráfico en el departamento del Meta, durante el periodo 2000-2015.

4.1.ENFOQUE Y DISEÑO

Para el presente trabajo, se ha determinado que el enfoque de la Investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, es decir, mixto; ya que se pretende analizar y explicar los principales efectos económicos del narcotráfico en cuanto a la concentración de la propiedad rural, el empleo y la producción campesina, así como los efectos sociales del narcotráfico visto desde variables como el desplazamiento forzado y la violencia manifestada esta en acciones de grupos armados al margen de la ley en el departamento del Meta; y que utilizando información estadística genera un análisis para describir variables y comportamientos respecto al tema a tratar.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.

Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2003) indican que “los estudios de carácter mixto, llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas y Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento”. En este sentido, se consideran las características de ambos enfoques, por una parte el enfoque cuantitativo al utilizar la recolección

y el análisis de datos para contestar la pregunta planteada en el presente trabajo y que al utilizar estadísticas y medición numérica se describen variables y patrones de comportamiento en una población, y por otra parte, el enfoque cualitativo, al interpretar eventos y utilizar el desarrollo de teorías para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente trabajo.

De otro lado, la investigación es de tipo no experimental, de diseño trasversal descriptivo, ya que se indagan y se describen variables como las descritas anteriormente y que con base a estas se pretende describir los posibles efectos económicos y sociales que podría tener el narcotráfico en el departamento del Meta durante el periodo 2000-2015.

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2003), señalan que la investigación de tipo no experimental cuantitativo, podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios donde se varía de forma intencional la variable independientes para ver su efecto sobre otras variables. Así mismo, los diseños trasversales realizan observaciones en un momento único en el tiempo cuando recolectan datos en cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, y reportan lo que arrojan, cuyos datos son de carácter descriptivo.

4.2.FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN

El presente trabajo tomara como recurso de apoyo, fuentes secundarias y diferentes estudios realizados sobre el narcotráfico colombiano y el desplazamiento, la tenencia de la propiedad rural, el empleo, el conflicto armado, y la producción rural en el departamento del Meta, cuya información se obtendrá bajo consultas por internet en páginas oficiales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Departamento Nacional de Estadística (DANE), Departamento de la Prosperidad Social, Observatorio del Territorio, Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Observatorio de Droga de Colombia y Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)

Por otro lado la información también será obtenida mediante consultas directas a las entidades territoriales e instituciones encargadas de realizar la recolección, análisis y publicación de los datos pero que no han realizado informes finales, ni publicado los resultados.

CAPITULO IV

5. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

El crecimiento del narcotráfico, es uno de los hechos más importantes de la historia de Colombia tanto social como económico y ha marcado en forma significativa el transcurrir de la sociedad colombiana. Durante varias décadas el narcotráfico en Colombia ha prosperado de manera constante y a su vez se ha convertido en una gran problemática que ha afectado el desarrollo normal del país; aunque el narcotráfico tiene un impacto económico y social difícil de cuantificar, ya que la ilegalidad que se esconde detrás es bastante grande, evaluar la magnitud del negocio es de arduo trabajo así como de evaluar las diferentes actividades que no se realicen a la luz pública, las aproximaciones y las discrepancias en cuanto a los datos de superficie, hectáreas cultivadas, producción, resultados de las estimaciones, permiten observar una visión confusa y compleja del narcotráfico (Belzner & Rodríguez, 2010); si es posible analizar los impactos más visibles en términos económicos y sociales del narcotráfico.

Bajo este contexto, el presente trabajo pretende analizar los efectos económicos y sociales del narcotráfico en el departamento del Meta; para lo cual, se hizo pertinente dividir la presente sección en tres partes fundamentalmente. En la primera, se analizó la dinámica del narcotráfico en el departamento del Meta, desde la perspectiva del área sembrada, la producción y los precios del cultivo de coca, durante el periodo 2000-2015; posteriormente, se realizó un análisis de la relación existente entre el narcotráfico y variables como el desplazamiento forzado y la violencia manifestada esta en acciones de grupos armados al margen de la ley. Finalmente, se vislumbraron los principales efectos económicos del narcotráfico en cuanto a la concentración de la propiedad rural, el empleo y la producción campesina en el departamento del Meta.

5.1.DINÁMICA DEL NARCOTRÁFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, PERIODO 2000-2015

A mediados de los años setentas, los narcotraficantes ampliaron sus actividades dedicándose a la transformación de base de coca para producir cocaína. El cultivo de cocaína se implantó en Colombia en dos tipos de explotaciones; las comerciales y las campesinas, ambas

ubicadas en lugares de colonizaciones campesinas, con deterioro en sus vías de comunicación, zonas de resguardos indígenas caracterizadas por poseer suelos pobres para la agricultura y la ganadería con precarias condiciones sociales y de infraestructura y una presencia casi nula del estado, situación en los cuales la protección de los actores armados ha jugado un papel determinante. En estas zonas generalmente confluyen conflictos sociales (marginalidad y pobreza), políticos (conflicto armado) y económicos (crisis en los mercados agrícolas).

En el departamento del Meta, la coca es cultivada por numerosas unidades de producción, que van desde 300 metros de cultivos en las explotaciones campesinas hasta 80 hectáreas en las explotaciones de tipo comercial (Rocha, 2000). En el Meta las hectáreas dedicadas al cultivo de coca han venido disminuyendo, pues durante el periodo 2000-2015 hubo una reducción del 55% en las hectáreas cultivadas en coca, al pasar de 11.123 hectáreas en el año 2000 a 5.002 en el año 2015 (Figura 1).

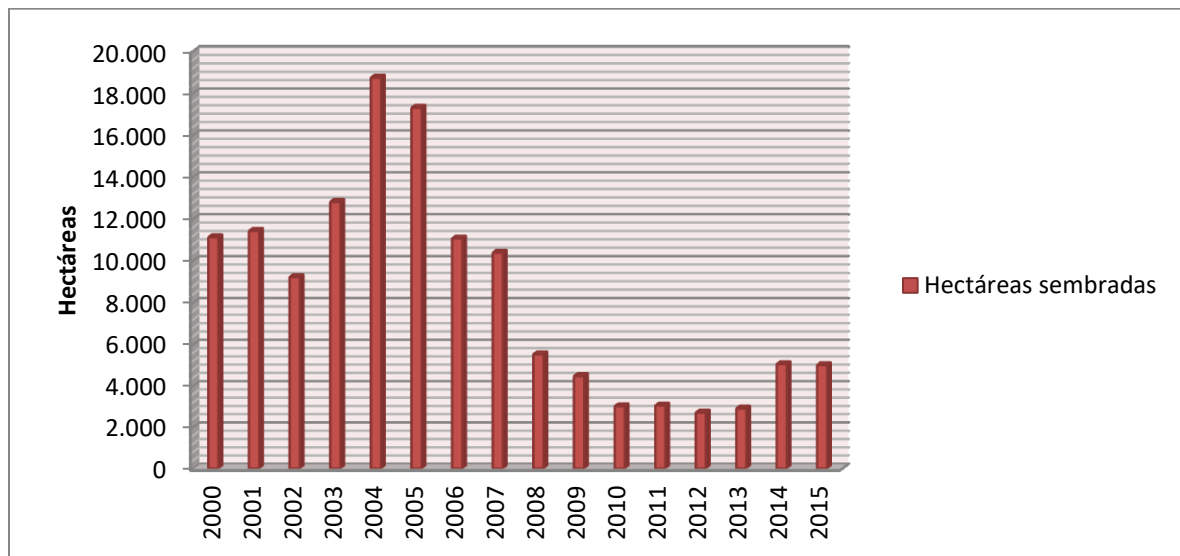


Figura 1. Cultivo de coca en el departamento del Meta, hectáreas sembradas, periodo 2000-2015. Elaboración propia con base en estadísticas del Banco de Información Espacial Proyecto SIMCI de la UNODC.

De los 29 municipios que conforman el departamento de Meta, en 10 se ha observado presencia de cultivos de coca durante el periodo 2001 - 2013. Los municipios que han estado afectados con cultivos de coca durante todo el periodo de estudio son: La Macarena, Uribe, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa. Los municipios con mayor representación en área dedicada a cultivos de coca durante el periodo son Puerto Rico con una participación promedio en cultivo de coa del 28%

(31.777 Ha.), seguido de Mapiripán con el 24% (27.307 Ha.), Vistahermosa con el 20% (22.555 Ha.) y La Macarena con el 11% (11.820 Ha.) (Figura 2).

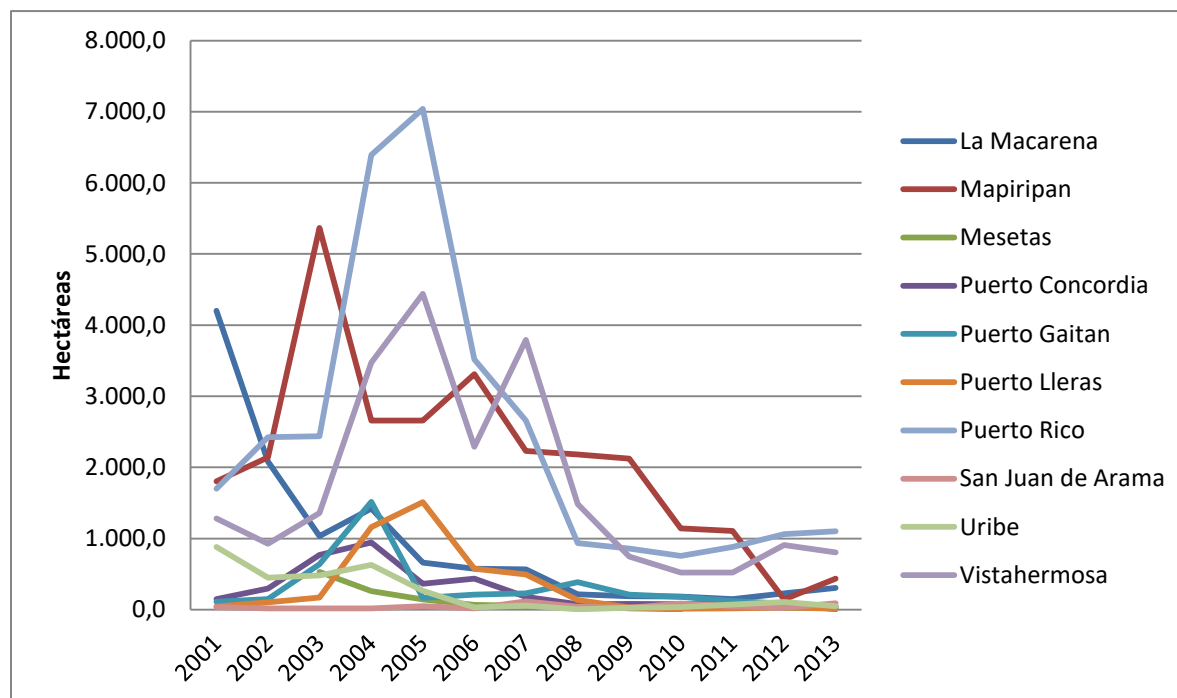


Figura 2. Cultivo de coca por municipios en el departamento del Meta, hectáreas sembradas, periodo 2001-2013. Elaboración propia con base en estadísticas municipales del Banco de Información Espacial Proyecto SIMCI de la UNODC.

En el censo 2013 se encontró coca en diez municipios del Departamento. El 38 % de la coca sembrada en 2013 se concentra en el municipio de Puerto Rico. En los municipios de La Macarena, Puerto Rico, San Juan de Arama y Mapiripán se encuentran zonas con densidad de cultivo mayor a 4 ha/km² llegando inclusive a tener 11 ha/km². El 12 % de los lotes encontrados en el censo 2013 ya se encontraban en el año 2001, el 44 % de los lotes de 2013 gravitan en el rango de 0,1 – 0,5 kilómetros de los lotes 2001, el 32 % gravitan en el rango de 0,51 – 2 kilómetros y el 12 % a más de 2 kilómetros (SIMCI, 2013). El tamaño promedio del lote en el departamento durante el periodo 2001-2013 ha oscilado entre 0.89 ha y 1.10 ha; así mismo, cerca del 70% del área sembrada con coca son iguales o menores a 3 hectáreas.

Por otra parte, en el departamento del Meta, dada la complejidad de las dinámicas alrededor de los cultivos ilícitos, existen dificultades para la obtención de información acerca de la producción de coca debido a los problemas de acceso, la alta movilidad de recursos y la

variabilidad de los lotes. En este sentido, el análisis de producción de coca en el Meta, se realizará teniendo en cuenta información estadística desde el año 2005, pues es a partir de este año, en que se tiene información relacionada con los rendimientos promedios anuales del cultivo de coca por hectárea, cuya información es preponderante para calcular la producción en el Meta.

Bajo este contexto, la producción de coca en el Meta ha tenido un comportamiento decreciente, presentando una reducción del 87% de la producción durante el periodo 2005-2015, al pasar de 171.319.500 tm (tonelada métrica) en el año 2005 a 22.008.800 tm en el año 2015. Así mismo, el rendimiento anual promedio por hectárea, también se ha reducido, al pasar de un promedio anual de 9.900 toneladas métricas en el 2005 a 4.400 toneladas métricas en el 2015 (Figura 3).

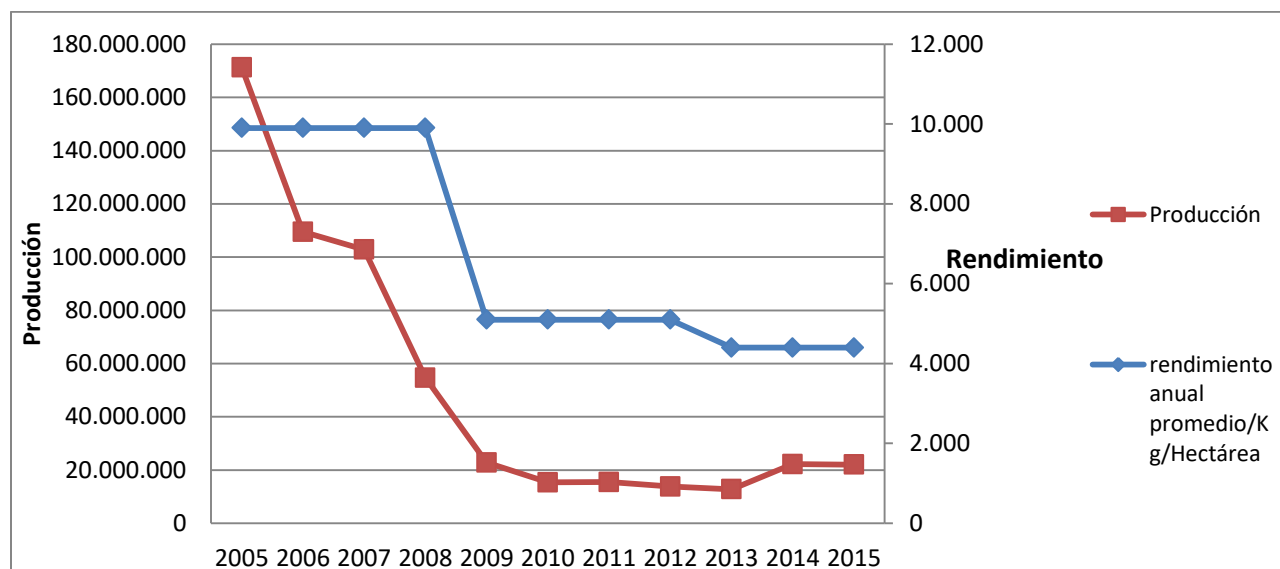


Figura 3. Producción por Tonelada Métrica de hoja de coca en el departamento del Meta, periodo 2005-2015.

Elaboración propia con base en estadísticas anuales del Banco de Información Espacial Proyecto SIMCI de la UNODC.

De otro lado, los precios de los productos derivados de la producción y transformación de los cultivos ilícitos no siempre reflejan un comportamiento relacionado con las leyes de oferta y demanda. En este sentido, factores como el orden público, la oferta de hoja de coca fresca, el clima, las dificultades de acceso a transporte y posibles cambios en los procesos productivos (homogenización de productos intermedios), han incidido en mayor o menor medida en la

disminución o amento en los flujos de comercialización y por ende en el comportamiento de los precios en el departamento del Meta.

Durante el periodo 2000-2015, los precios del mercado de la coca han presentado una tendencia al alza con un crecimiento del 35%; el crecimiento más significativo se dio a partir del año 2006 al pasar de \$4.155.000/Kg (US\$ 1.762/kg) a \$4.747.000/Kg (US\$1.732/Kg) en el 2015 (Figura 4).

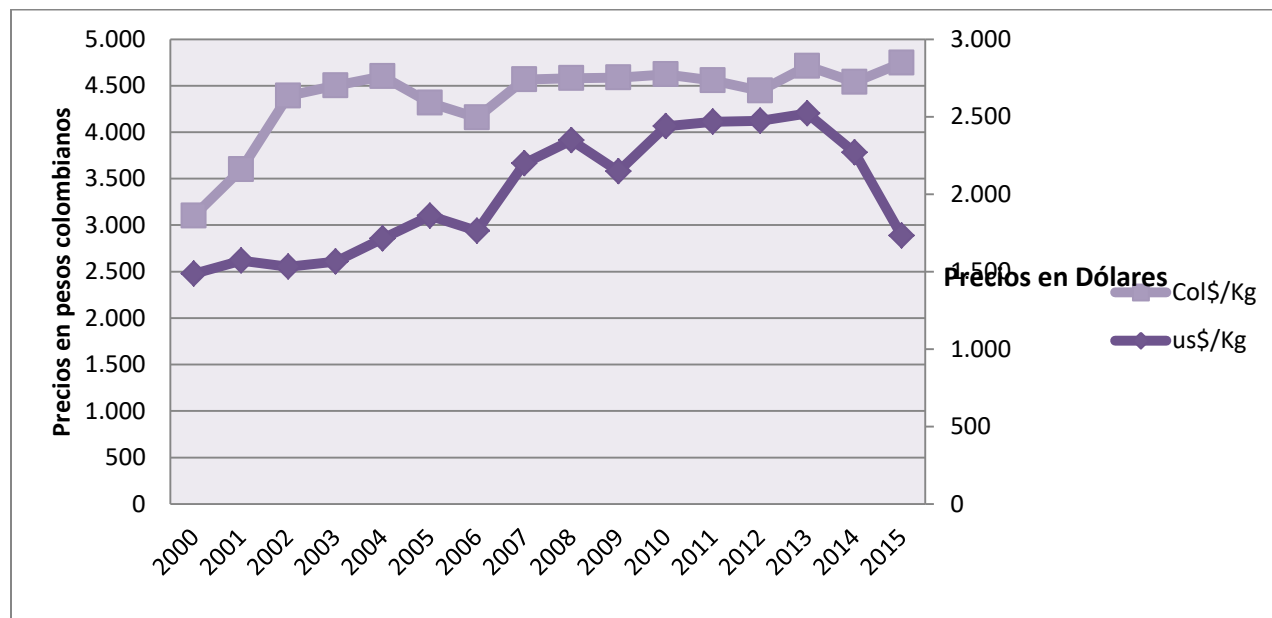


Figura 4. Comportamiento de los precios de la coca en el departamento del Meta, periodo 2000-2015. Elaboración propia con base en estadísticas anuales del Banco de Información Espacial Proyecto SIMCI de la UNODC.

En los últimos años la tendencia de los precios de los derivados de la coca en el Meta ha tendido a incrementarse. Si bien es cierto, el precio de la hoja de coca fresca ha presentado una leve caída durante el periodo 2004-2015, al pasar de 3.300/Kg (US\$ 1.2/kg) en el 2004 a 3.000/Kg (US\$ 1.2/kg) en el 2015, la tendencia de su comportamiento es al alza (Figura 5). Es imperativo indicar, que la venta de hoja de coca fresca en fincas en el Meta es minoritaria, solo el 14% de las Unidades Productoras Agropecuarias venden la hoja. Se estima que el 86% sea procesado en fincas por el Productor Agropecuario con coca a pasta básica de cocaína (UNODC, 2014). Así mismo, la base de cocaína ha presentado un incremento del 17% durante el periodo de estudio, al pasar de 2.250.000/Kg (US\$ 793/kg) en el año 2004 a 2.681.000/Kg (US\$ 978/kg) en el 2015; y la base de coca ha tenido una fluctuación de precios mínima, cuyo comportamiento durante el periodo de estudio no ha presentado mayor variabilidad (Figura 5).

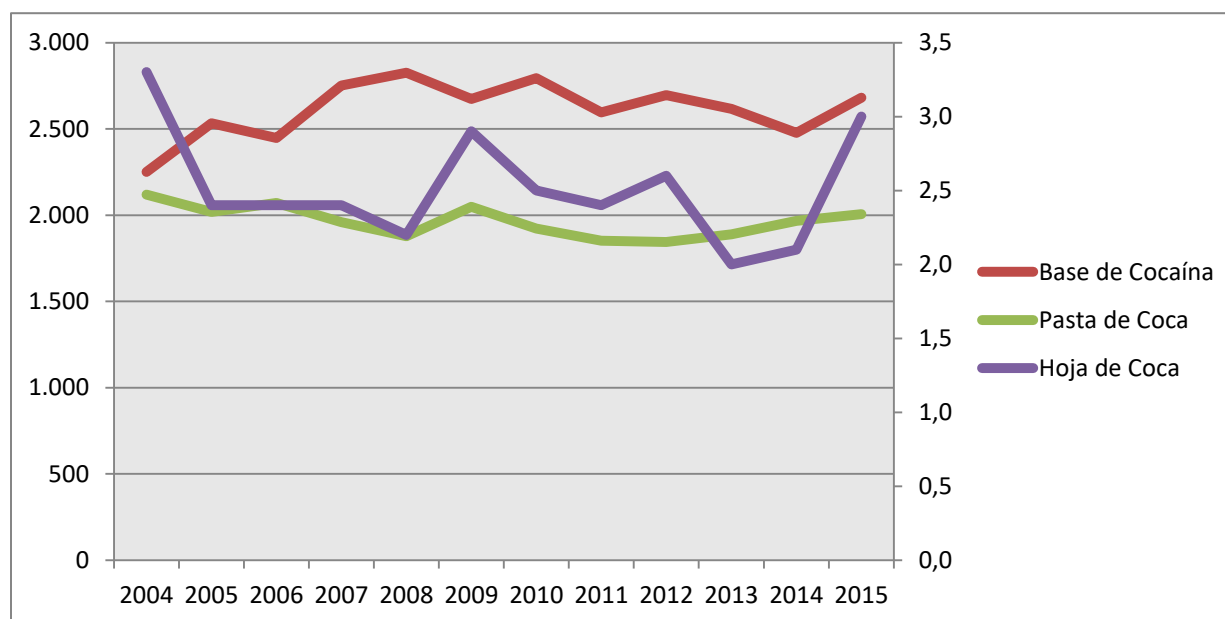


Figura 5. Comportamiento de los precios de los derivados de la coca en el departamento del Meta, periodo 2004-2015. Elaboración propia con base en estadísticas anuales del Banco de Información Espacial Proyecto SIMCI de la UNODC.

Las nuevas estrategias de control territorial, las negociaciones en el marco de la cumbre agraria y las negociaciones del proceso de paz pudieron haber incidido en el comportamiento de los precios de los derivados de la coca, tanto en el departamento del Meta como a nivel nacional. De otro lado, existirían otros incentivos que podrían incidir de manera directa en el mercado local de la coca, los cuales no dependen exclusivamente de los cambios en los precios, sino que corresponden a variaciones de oferta y demanda y en las estrategias de negociación en el mercado.

En este sentido, en la oferta del mercado de coca, pueden existir incentivos para ampliar la frontera de producción del cultivo y la implementación de nuevos esquemas de producción. De hecho en el departamento del Meta, dada la rentabilidad de este tipo de cultivos, es probable que el productor campesino deje de cultivar alimentos, por producir cocaína, en cuyo cultivo los márgenes de ganancia en el corto plazo son mayores.

Por el lado de la demanda, la tendencia al aumento de los focos de expendio de drogas en las zonas urbanas del departamento estaría transformando la dinámica del mercado de la coca, lo

que implicaría un aumento de la demanda interna, cambios en las estrategias de las unidades de comercialización y diversificación del producto. Y en cuanto a las estrategias de negociación en el mercado, la recuperación del precio local de cocaína podría estar influenciada por la tendencia del alza del dólar en relación al peso Colombiano, pues existiría el incentivo de recibir más pesos colombianos por cada dólar transado; este efecto favorece las negociaciones para acopiar materias primas elementales como la pasta de cocaína e incluso la hoja de coca, lo cual explicaría la estimulación de la demanda de acopio de hoja, pasta básica y base de cocaína, vía aumento de sus precios (UNODC, 2015).

5.2.EFECTOS SOCIALES DEL NARCOTRÁFICO EN EL META

Entre el conjunto de consecuencias sociales del narcotráfico, las que sin ninguna duda reciben la atención más inmediata de la población son la violencia manifestada en acciones de grupos armados ilegales y el desplazamiento forzado. En este sentido el departamento del Meta ha tenido presencia constante de grupos al margen de la ley (paramilitares y FARC-EP), sin embargo, ha sido de particular importancia para las FARC por su larga tradición en el departamento, por las bases sociales con las que ha contado y por ser una zona para el desarrollo de economías ilícitas basadas en el cultivo de coca y tráfico de armas y drogas (Fundación Ideas para la Paz, 2011). Bajo este contexto, la historia de la región se ha caracterizado no solo por la colonización agraria y armada, sino también por una colonización cocalera, que se empezó a dar a partir de los años 80 y, posteriormente, se consolidó con la aparición de narcotraficantes y grupos de justicia privada, a partir de los 90.

Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar la relación entre conflicto armado y narcotráfico durante el periodo 2000-2015, se observó que conforme aumentan los cultivos de coca, aumentan el número de homicidios y desapariciones forzadas en el departamento. De hecho durante el periodo 2002-2006, donde se registró el mayor incremento en hectáreas sembradas de coca (en promedio 69.144 Ha), se registró también el mayor número de homicidios (en promedio 10.167 personas y desapariciones forzadas en promedio 711 personas).

En cuanto a los actos terroristas y las amenazas, aunque no tuvieron mucha variabilidad durante el periodo de estudio, si tendían a incrementarse o a reducirse de acuerdo al comportamiento creciente o decreciente de las hectáreas sembradas en coca (Figura 6).

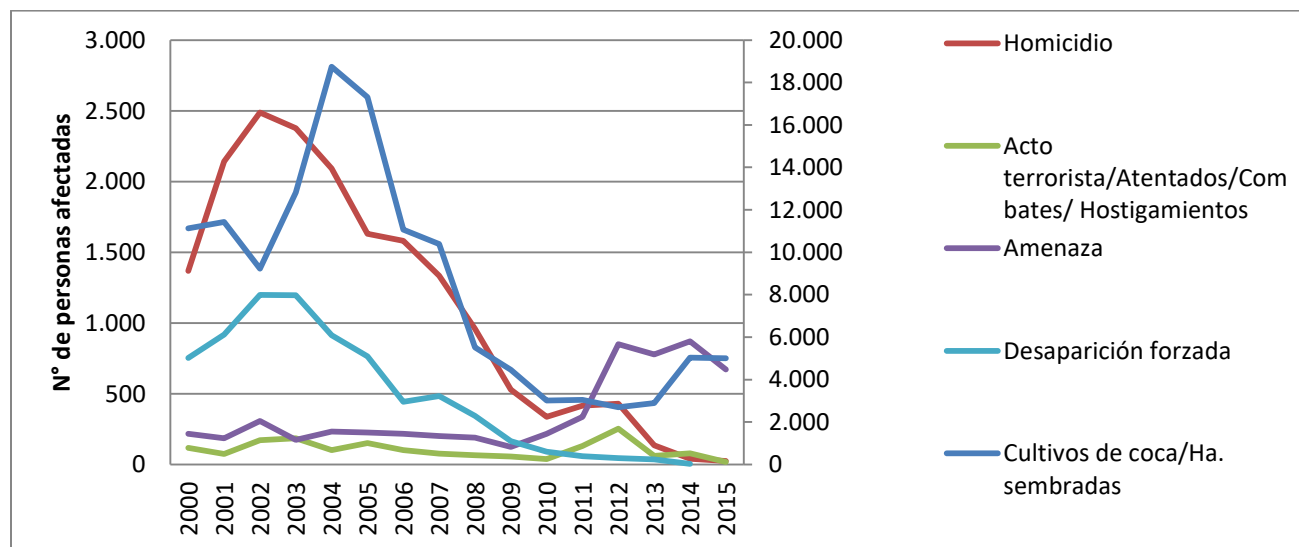


Figura 6. Relación entre narcotráfico y acciones armadas de los grupos al margen de la ley en el departamento del Meta, periodo 2000-2015. Elaboración propia con base en el Registro Único de Víctimas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.

De otro lado, al analizar geográficamente la presencia de grupos armados, especialmente de las FARC, y los cultivos de coca en el departamento del Meta, se observó que tanto en el año 2002 (Figura 7) como en el año 2014 (Figura 8), los municipios con dominio de las FARC, también tuvieron presencia de cultivos de coca. Los municipios más afectados por esta relación directa (conflicto armado- violencia-cultivos de coca) durante todo el periodo de estudio han sido: La Macarena, Uribe, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa.

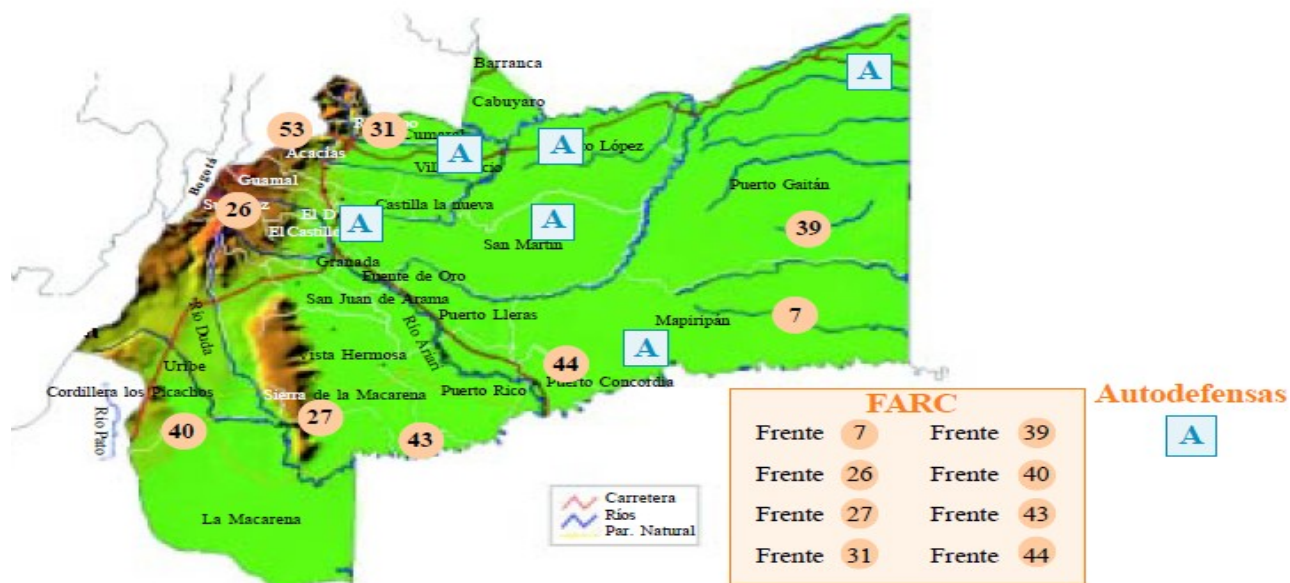


Figura 7. Presencia frentes de las FARC y Autodefensas en municipios del departamento del Meta, año 2002. Tomado del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

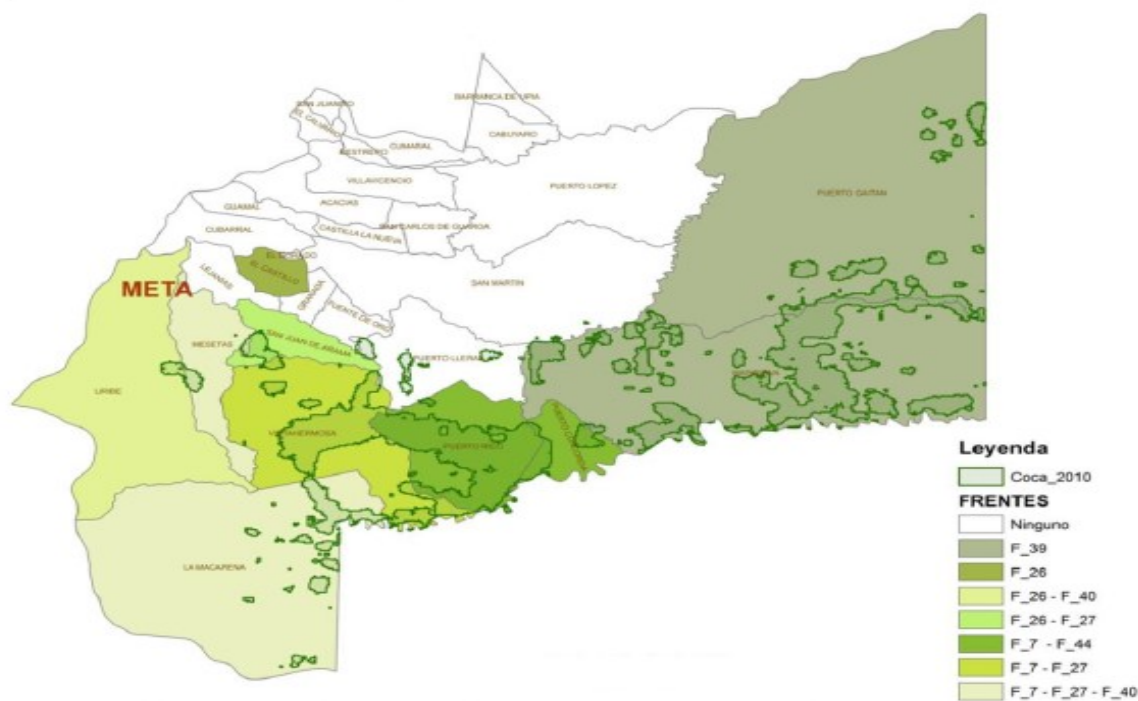


Figura 8. Presencia de frentes de las FARC y cultivos de coca en municipios del departamento del Meta, año 2014. Tomado de la Base de Datos del Conflicto –Unidad de Análisis Siguiendo el Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.

Por otra parte, el narcotráfico en el departamento del Meta también presentó una estrecha relación con el fenómeno del desplazamiento, ya que la presencia de cultivos ilícitos genera una presión adicional sobre la tierra y sobre el desplazamiento, debido no sólo a la adquisición de tierras para el cultivo de coca, sino también por la importancia del control de corredores para el transporte de drogas. La fumigación de cultivos ilícitos implica, asimismo, la destrucción de los activos de los cultivadores, generando un choque en sus ingresos y un incremento en los combates.

Al analizar estadísticas recientes disponibles, se observó que el desplazamiento forzado en el Meta guarda una relación directa con los cultivos de coca y la aspersión o fumigación aérea de dichos cultivos. Esta relación se hizo más evidente a partir de año 2004, en cuyo año se incrementó el cultivo de coca respecto al año 2003 al pasar de 12.814 hectáreas a 18.740 hectáreas sembradas en coca. Dicho incremento ocasiono el aumento de las fumigaciones áreas y un desplazamiento forzado de la población mayor para el año 2005 respecto al año 2004; entendiendo que el desplazamiento no se origina en el mismo año donde se incrementan la siembra de cultivos de coca y la fumigación área de los mismo, sino dicho impacto aparece en años posteriores donde los hogares se ven obligados a desplazarse de su lugar de permanencia y/o procedencia. A partir del año 2006 hasta el año 2014 la reducción en cultivos de coca, - ocasionada entre otras cosa por el incremento acelerado de la aspersión área-, genera una disminución del desplazamiento de la población en el Meta y una reducción de las fumigaciones áreas para años posteriores al 2006 (Figura 9).

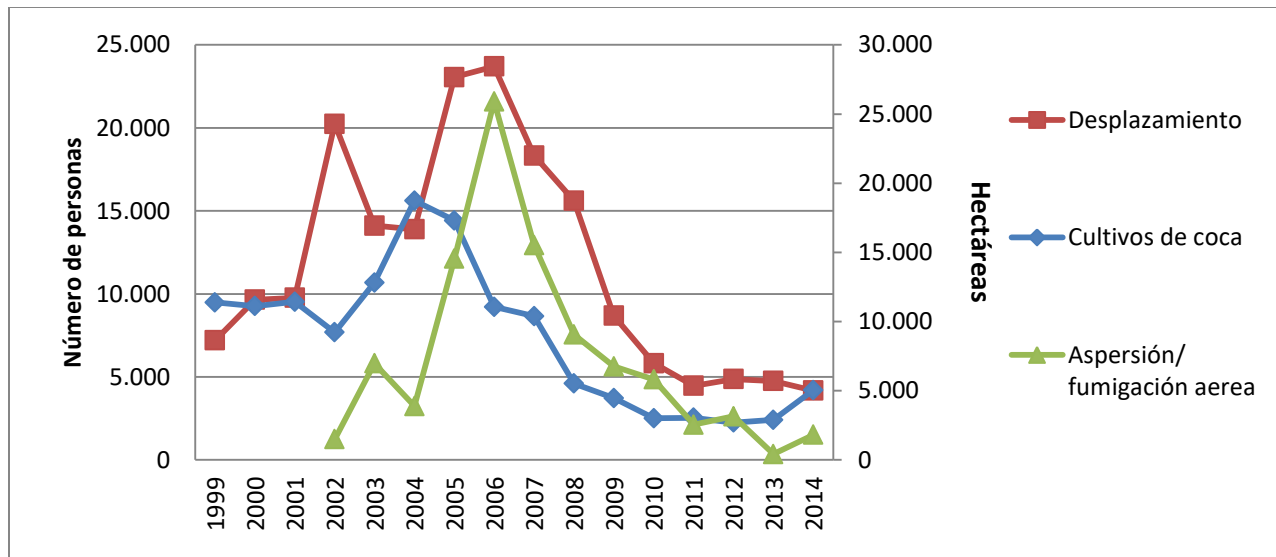


Figura 9. Relación de los cultivos de coca y la fumigación aérea con el desplazamiento en el departamento del Meta, periodo 1999-2014. Elaboración propia con base en el Registro Único de Víctimas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.

La compra de tierras por narcotraficantes, como mecanismo para lavar dinero ilícito, genera un proceso especulativo de la tierra, que diezma la capacidad de adquisición del Estado y las posibilidades de negociación de los campesinos frente a los terratenientes. Además, los narcotraficantes heredaron en muchos casos conflictos sociales en las tierras que compran, para lo cual conformaron grupos de autodefensa que intensificaron el conflicto en ciertas regiones y, desde luego, el desplazamiento (Pérez, 2002 & Reyes, 1994).

Los procesos de concentración de la tierra, conflictos sobre el uso del suelo, las transformaciones en la espacialidad en el ordenamiento del territorio y la implementación de modelos de empresarialización de la producción rural causados por el conflicto armado y el narcotráfico, son correlativos al abandono o desplazamiento de la población, ya que esta termina siendo una estrategia en el marco de la guerra, orientada a la desterritorialización, la expansión de áreas de control y a la apropiación violenta de propiedades agrícolas (Ibañez y Querubin, 2004).

En cuanto al desplazamiento forzado por municipios en el Meta, se observó que específicamente en los municipios ubicados al sur del Departamento, se agudiza la situación del desplazamiento, ya que las acciones de las FARC-EP están encaminadas a la disputa con otros grupos armados por el control territorial, debido a que ésta es una zona de fuerte presencia de cultivos ilícitos y de otras rentas ilegales. En este sentido, para el periodo 2000-2015 el

municipio de Vistahermosa es el que presentó mayores casos de desplazamiento con 38.630 personas expulsadas durante el periodo; así mismo le sigue el municipio de Puerto Rico con 20.084 casos de desplazamiento, el municipio de Mapiripan con 18.251 y Mesetas con 10.494 personas expulsadas (Tabla 1). Así mismo, durante el periodo 2005–2008, se agudizó la problemática del desplazamiento para la mayoría de los municipios analizados.

Tabla 1.

Municipios con mayor número de desplazamiento individual en el departamento del Meta, periodo 2000-2015

AÑO	Vistahermosa	Puerto Rico	Uribe	Mapiripan	La Macarena	Mesetas	Puerto Concordia
2000	1.227	953	243	1.099	430	719	907
2001	1.318	671	246	730	359	715	999
2002	3.281	728	921	4.765	1.119	1.235	778
2003	1.369	1.232	443	1.545	479	932	403
2004	2.324	929	641	686	599	923	1.155
2005	6.803	5.092	699	815	1.226	1.197	795
2006	7.338	2.844	850	2.088	1.406	1.245	990
2007	5.034	2.579	872	1.293	1.270	804	762
2008	3.895	1.614	566	2.500	898	855	616
2009	2.017	936	397	650	442	448	317
2010	1.197	615	273	534	355	351	226
2011	879	521	330	400	342	244	272
2012	657	450	353	396	367	283	400
2013	550	429	459	345	386	234	190
2014	480	315	263	278	366	208	223
2015	261	176	121	127	261	101	346
TOTAL	38.630	20.084	7.677	18.251	10.305	10.494	9.379

Fuente: Elaboración propia con base en el Registro Único de Víctimas, fecha de corte 01 de junio de 2016 y el Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento de CODHES

La violencia (manifestada en presencia y acciones de los grupos armados), el desplazamiento forzoso y el narcotráfico parecen tener una estrecha relación. La intensidad y la naturaleza del conflicto determinan los ataques dirigidos contra la población civil, ya que cuando el conflicto se intensifica, incrementar el número de crímenes contra la población civil se convierte en una estrategia de bajo costo para despejar el territorio, lo cual permite a los grupos armados al margen de la ley fortalecer el control en sus regiones, transportar con facilidad armas y desarrollar actividades ilegales con menores obstáculos (Ibáñez, 2008). Ocasionando de esta

manera el desplazamiento forzado de la población, ya sea de carácter reactivo de la población ante un evento concreto que haya afectado al hogar, o preventivo, para evitar los eventos violentos relacionados con el conflicto armado (Ibáñez & Vélez, 2003).

Dado que la intensificación del conflicto armado y del desplazamiento, se da al sur del departamento del Meta, es probable que los efectos sociales del narcotráfico se profundicen, toda vez que los municipios localizados en esta área geográfica del departamento, tienden a presentar mayores necesidades básicas insatisfechas, índices de pobreza crecientes, dificultad para acceder a servicios sociales de salud, educación y agua potable y menos posibilidades para el desarrollo económico de sus actividades agrícolas. De hecho municipios como La Macarena, Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa presentan altos índices de vulnerabilidad, entendida esta, como el grado de susceptibilidad que tienen los bienes, individuos y grupos humanos de ser afectados por una amenaza (PNUD, 2011). En este sentido, los municipios mencionado con antelación presentan altos índices de vulnerabilidad por rasgos socios demográficos (El cual mide promedio de miembros en el hogar, porcentaje de hogares con jefatura femenina, número promedio de adultos mayores (> 64 años) por hogar, número promedio de niños (< 5 años) por hogar); vulnerabilidad por capital humano (El cual mide tasa de alfabetización y personas en edad de trabajar por hogar) y vulnerabilidad por ruralidad (Figura 10).

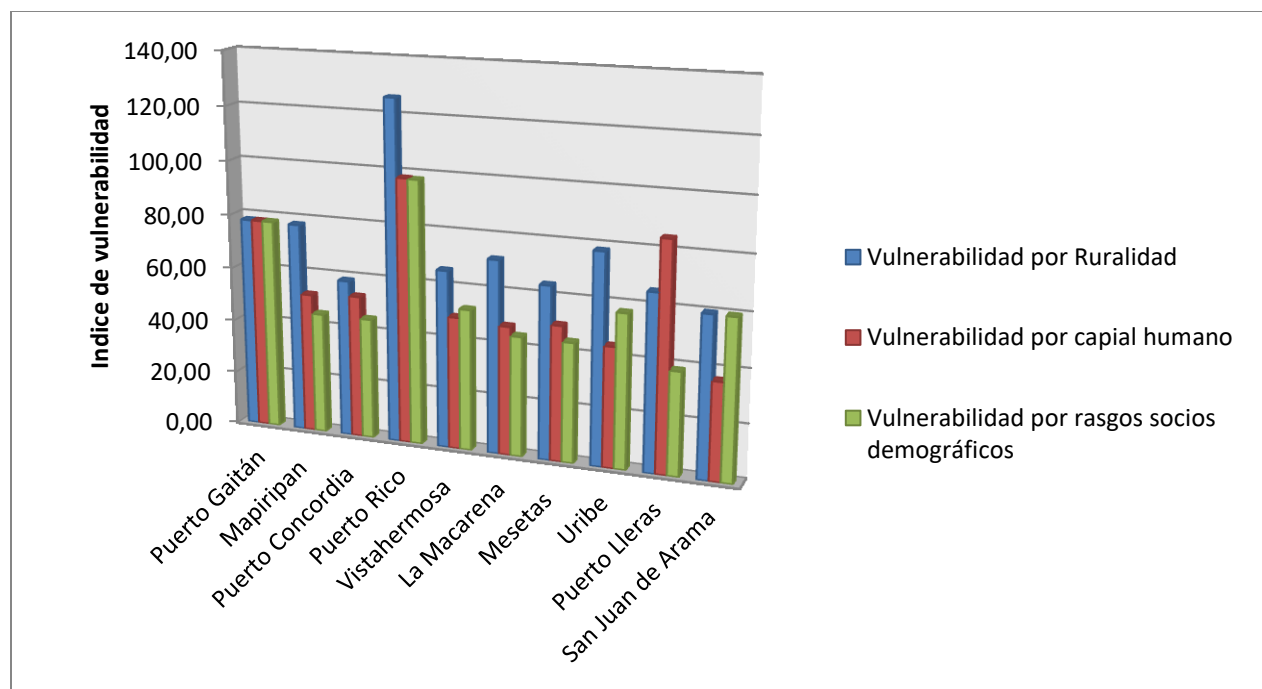


Figura 10. Índice de vulnerabilidad por ruralidad, capital humano y rasgos sociodemográficos en el departamento del Meta, año 2011. Elaboración propia con base en Información del PNUD, 2011

En este sentido, los municipios del sur del Meta, presentan índices de ruralidad en promedio superiores a 60, lo cual indica que los municipios, dada su densidad y distancia de los centros poblados, tienen menos probabilidad de generar rendimientos crecientes y de acercarse a las economías de aglomeración. Así mismo, los municipios de Puerto Gaitán, Puerto Rico, Vistahermosa, Uribe y San Juan de Arama presentan índices de vulnerabilidad por capital humano superiores a 53.06, es decir, que estos municipios podrían tener una población con mayores tasas de alfabetismo. Finalmente en cuanto al índice de vulnerabilidad por rasgos sociodemográficos, se observó, que en promedio, la mayoría de municipios presentaron un índice superior a 50.2 (Figura 10).

Bajo este contexto, se confirma la relación existente entre el conflicto armado y el desplazamiento con el narcotráfico, ya que los municipios ubicados en el sur del Meta son los que durante el periodo 2000-2015 han tenido mayores efectos sociales causados por el narcotráfico en el Meta.

5.3.EFECTOS ECONÓMICOS DEL NARCOTRÁFICO EN EL META

La propiedad rural en Colombia ha sido un concepto clave, en especial si la tierra se aprecia como riqueza acumulativa de los individuos y no como factor de producción, adquiriendo un poder no solo social sino político (Contraloría General de la Nación, 2005). En este sentido, los narcotraficantes han destinado gran cantidad de sus recursos a la compra de tierras agrícolas. La estimación del volumen de tierras adquiridas por el narcotráfico no es fácil de llevar a cabo. Sin embargo, se estima que entre el 8% y el 23% de los ingresos repatriados por los narcotraficantes se destina a la compra de tierras (Belzner & Rodríguez, 2010).

Una de las principales consecuencias del narcotráfico en el Meta ha sido la adquisición de tierras por parte de grupos armados cuyos recursos provienen del negocio de las drogas ilegales. Dichas tierras representan un ahorro en el largo plazo a medida que la inversión pública y la infraestructura las valoriza. En este sentido, las tierras adquiridas presentan buena calidad y altos niveles de adecuación, las cuales se convierten en tierras improductivas, utilizadas para la especulación o la ganadería extensiva. En este sentido, el narcotráfico ha logrado un enorme poder económico y una gran incidencia en la producción y posterior comercialización del sector agropecuario, toda vez, que la inversión en el sector agrícola se ha visto afectada por factores de incertidumbre y riesgo, engendrados por esta economía ilícita. Consecuente con lo anterior, la estructura de tenencia y productividad agrícola en el Meta cede a las presiones de grupos ilegales que promueven la producción de cultivos ilícitos en zonas de frontera agrícola; esto provoca distorsiones como: un tope de ganancia exagerado y salarios elevados, comparados con la economía tradicional campesina, lo cual ocasiona una reorganización productiva en el sector rural (Gaviria & Muñoz, 2007).

Este efecto repercute en los índices de concentración de la propiedad; ya que la concentración de la distribución de los predios en grandes extensiones para el año 2009 en el departamento redondo en un índice de Gini de 0,86, cuya concentración de la tierra figuran entre los más altos a nivel nacional. Así mismo, para el año 2009 el índice de Gini, medido por propietarios fue de 0,86 y de 0,83 cuando se controla por calidad de la tierra (concentración de UAFs) (Figura 11). Cifras alarmantes si se añade que para el año 2000 el 13,7% de los propietarios (para predios mayores a 500 hectáreas) poseían cerca del 80% del área rural; así

mismo para el 2009, el mismo porcentaje de propietarios (13%) seguía controlando el 79,14% de la superficie, mientras que los pequeños propietarios, tanto para el año 2000 como 2009, representaban en promedio el 51% y poseían cerca del 3% del área rural. El anterior comportamiento conduce a una estructura de propiedad “bimodal”, la cual surge en el momento que se configuran dos polos de tenencia de la tierra: uno conformado por un gran número de propietarios con muy poca tierra y otro donde un porcentaje pequeño de propietarios monopoliza un alto porcentaje de ellas (Machado, 2005). Sino también, conduce a conflictos permanentes y discriminaciones por parte del Estado en la aplicación de instrumentos y políticas, que promueven la conformación de pequeñas propiedades, las cuales con el tiempo disminuyen el nivel de ingresos de los campesinos y profundiza la pobreza rural.

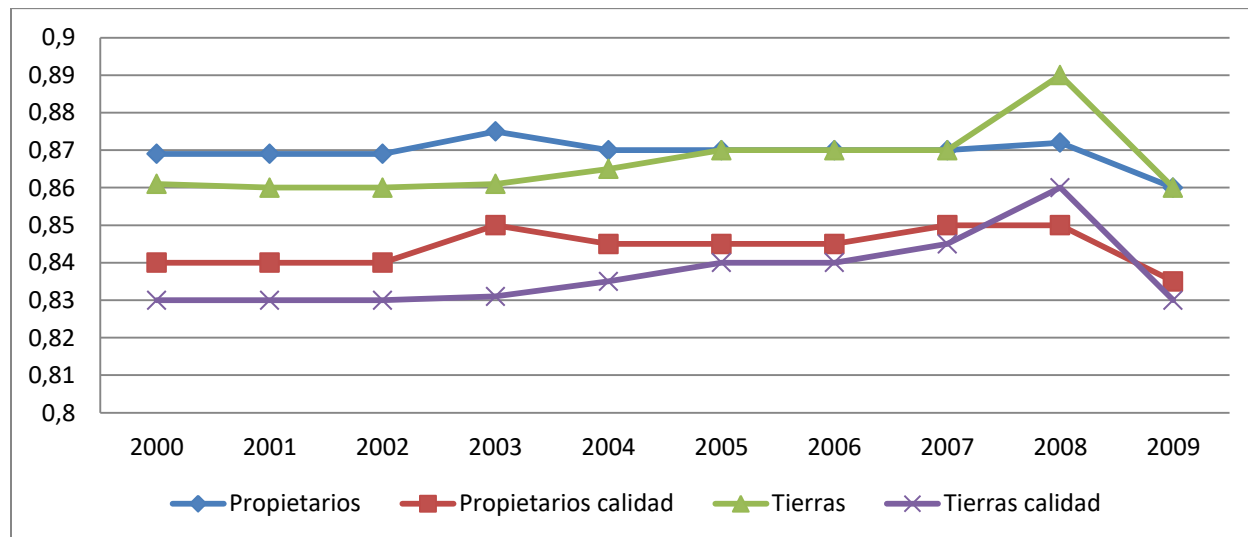


Figura 11. Evolución de los coeficientes GINI en el departamento del Meta, 2000 – 2009. Tomado del IGAC, 2012.

Bajo este contexto, la creciente apropiación de tierras por parte del narcotráfico ha elevado la concentración de la propiedad, recomponiendo el latifundio y contribuyendo, además, al desplazamiento forzoso de los campesinos hacia ciudades y sitios de colonización (Contraloría General de la Nación, 2005).

A nivel municipal la propiedad rural está más concentrada en municipios como Retrepo, Cumaral, Acacias, Castilla la nueva y San Martín, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico, Puerto Lleras, Mesetas y San Juan de Arama; cuyo Gini de propietarios y de tierras para el año 2009 osciló entre 0,79 a 1,5. De otra parte la Macarena fue el municipio con menor

concentración de la propiedad, cuyo Gini estuvo en 0,31 en el caso del índice de Gini para propietarios y en 0,29 para el Gini de tierras (Figura 12).

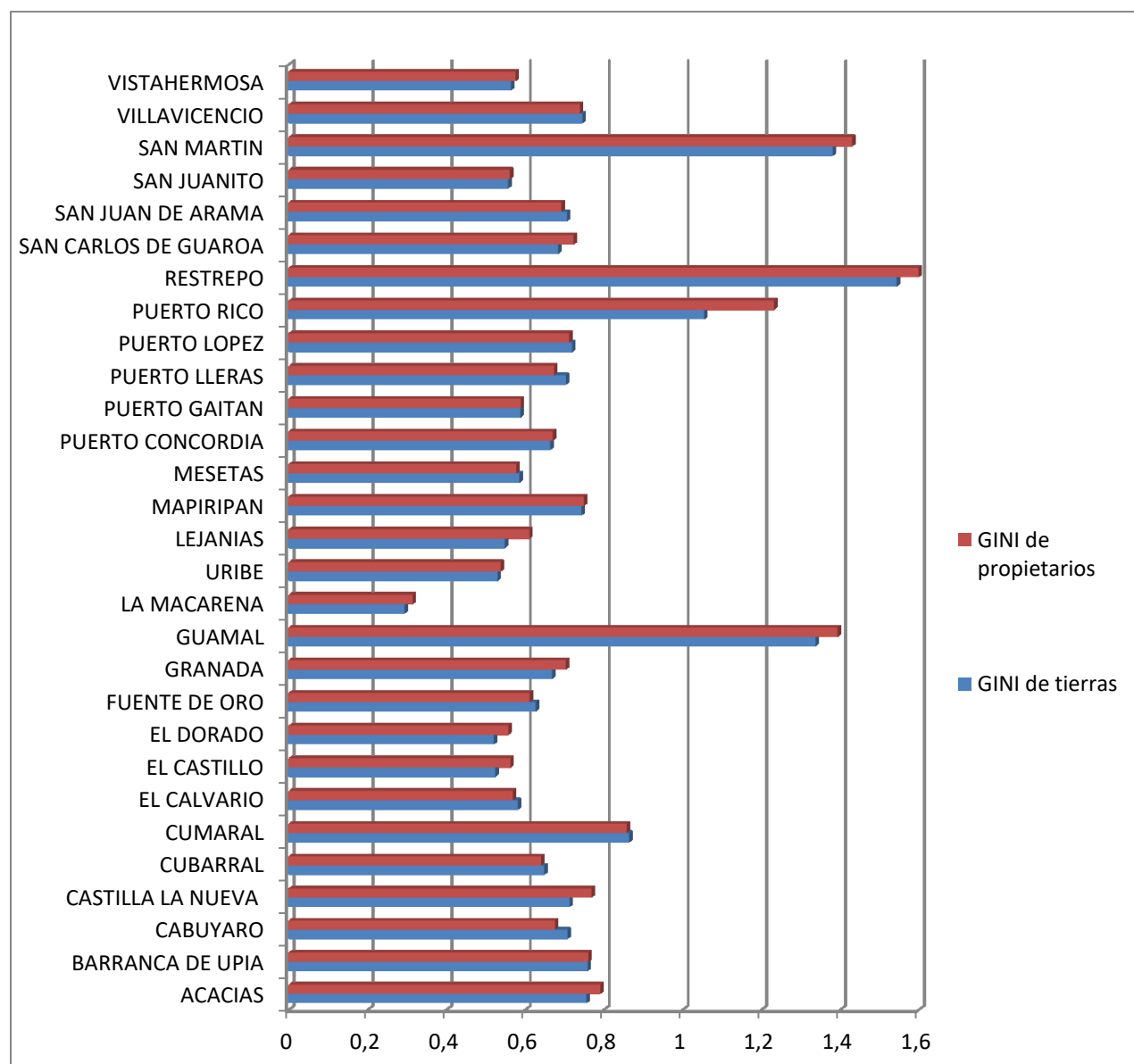


Figura 12. Índices de Gini de propietarios y tierras a nivel municipal en el departamento del Meta, año 2009.

Tomado del IGAC, 2012.

Se hace imperativo indicar, que con excepción de la Macarena, todos los municipios del sur del Meta, los cuales tiene presencia de cultivos de coca, tiene una concentración de la propiedad alta, incluso el municipio de Puerto Concordia presenta un índice de Gini superior a 1.

Por otra parte, dado que el cultivo de coca en el Meta sucede primordialmente en las áreas rurales, es posible presumir que ha afectado de manera importante la agricultura y los pequeños productores. Esto por dos razones fundamentales: primero, porque la tierra siempre ha sido uno de los pivotes del conflicto generado por el narcotráfico y, segundo por la ausencia estatal en lugares aislados de los centros urbanos. Una correlación entre el narcotráfico, medido a través de las hectáreas sembradas en coca, y la producción agrícola, medida por el PIB agrícola, se ilustra en la figura 13. En esta se observó que el narcotráfico ha afectado adversamente el crecimiento del PIB en el Meta. Durante el periodo 2000-2015, el PIB agrícola se desaceleró en medio de una expansión de los cultivos de coca, y posteriormente ocurrió todo lo contrario.

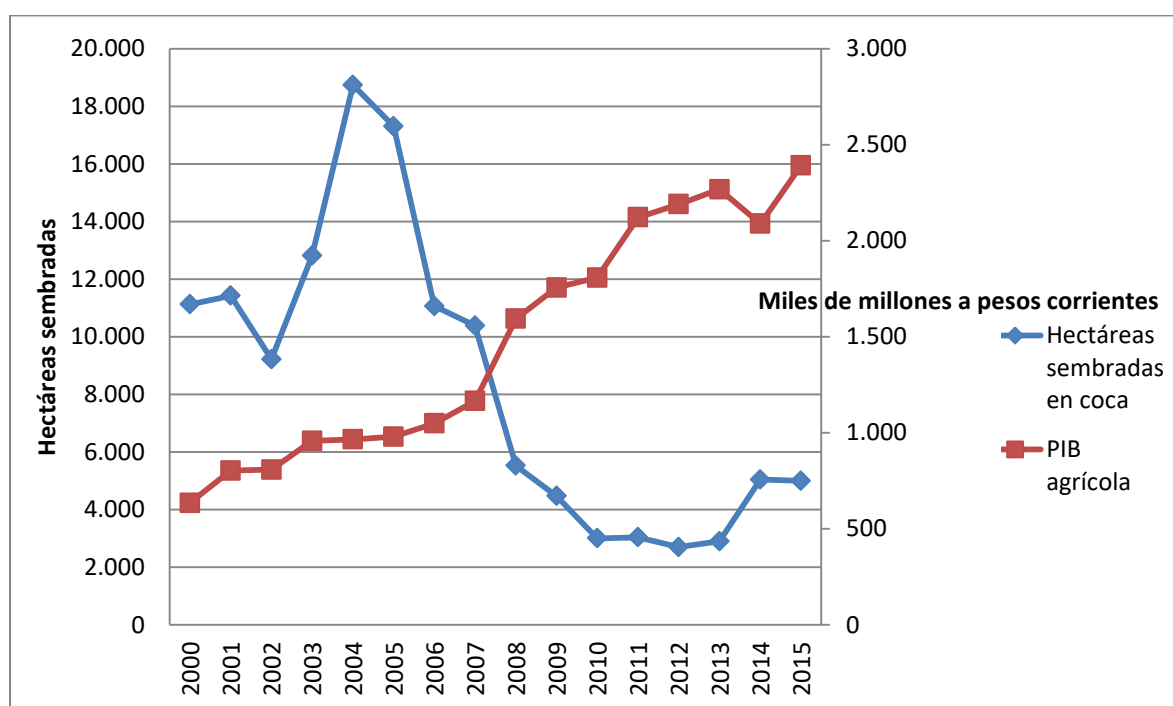


Figura 13. PIB agrícola y hectáreas de coca sembradas en el departamento del Meta, 2000- 2015. Elaboración propia en base al MADR - Encuestas Nacionales Agropecuarias y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.

La relación entre narcotráfico y la producción agrícola se presenta por diversos canales: el aumento en costos, tanto de producción como de comercialización, cambios en el uso del suelo e inversión; el miedo y la aprehensión de vivir en un contexto de conflicto, incluso sin que el hogar sea atacado directamente, debilita los mercados de insumos. El riesgo que enfrentan los proveedores de insumos, aunado a la reducción en la oferta laboral debido a la migración

forzada producen una contracción en la oferta de insumos, lo cual se traduce en un mayor precio y, por consiguiente, en una menor producción.

Así mismo, la percepción del riesgo constante a ser desplazado o a perder sus tierras y activos productivos produce incentivos para el cambio en los usos del suelo; ya que es posible que aumente el porcentaje del suelo para la producción de cultivos transitorios, a costa de una reducción en los permanentes, incluso si estos últimos son más rentables que los primeros. Ello debido a que los cultivos transitorios dan cosechas más seguidas que los permanentes y, en muchos casos, requieren una menor inversión. Los cultivos transitorios permiten entonces a los hogares recuperar su inversión en un periodo más corto de tiempo y contar con efectivo permanentemente (Ibáñez & Arias, 2012). En el caso del departamento del Meta, pareciese existir este tipo relación, pues conforme disminuye las hectáreas sembradas en coca aumenta las hectáreas cosechadas en cultivos permanentes (Figura 14).

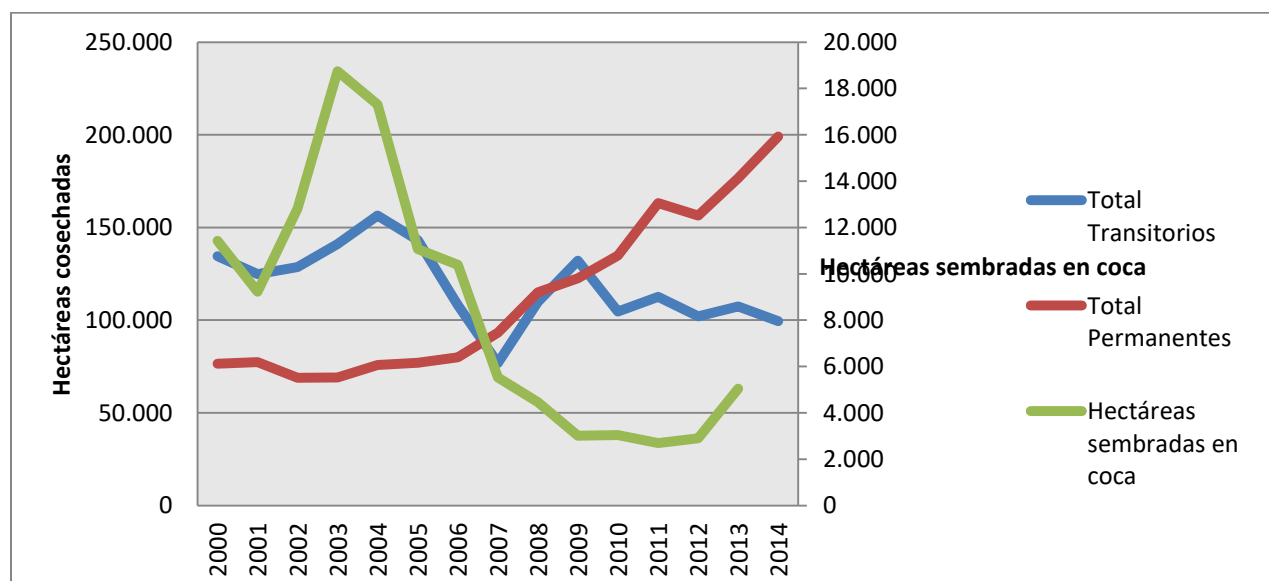


Figura 14. Relación de hectáreas sembradas en cultivos de coca y hectáreas cosechadas en cultivos permanentes y transitorios en el departamento del Meta, 2000-2014. Elaboración propia en base al MADR - Encuestas Nacionales Agropecuarias, la Misión de Observación Electoral- MOE y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.

El cultivo de coca en el departamento del Meta incide de manera negativa en la producción agrícola, toda vez que la presencia de cultivos ilícitos genera una presión adicional sobre la tierra y sobre el desplazamiento, debido no sólo a la adquisición de tierras para el cultivo de coca, sino también por la importancia del control de corredores para el transporte de drogas.

El narcotráfico implica, asimismo, la destrucción de los activos de los cultivadores, generando un choque en sus ingresos y un incremento en los combates.

De otro lado, los cultivos de coca han dejado de ser de colonos y se presenta cada vez la estabilización de los lotes de coca y de la población dedicada a esta actividad. A diferencia de los años anteriores en los cuales los narcotraficantes tenían el control de todas las fases del negocio, en la actualidad el productor primario se involucra cada vez más en el proceso de transformación asumiendo los riesgos que les han transferido los narcotraficantes. Es importante anotar que la racionalidad de los cultivadores no parece exclusivamente económica; las razones para involucrarse en la actividad ilícita tienen que ver principalmente con la seguridad que le reporta el mercado, lo cual se traduce en estabilidad en los ingresos y empleo.

En este sentido, en el departamento del Meta el promedio de hectáreas por hogar era de 3,7 hectáreas. La mano de obra provenía generalmente de la familia, la cual no tiene remuneración y en menor medida de la contratación de trabajadores para períodos fijos o temporales para las diversas actividades.

El cultivo de coca en el Meta osciló entre 2,5 y 3,8 cosechas al año, en época de cosecha demandan mayor mano de obra para la recolección, generalmente mediante la contratación de personas denominadas “raspachines”, la cual es una población flotante y estacional dependiendo de los ciclos productivos y trabajan a destajo según la cantidad de hoja recogida, con jornales relativamente más altos que los que pagan en el cultivo tradicional (\$ 25.000 a 30.000 frente a jornales entre \$ 15.000 y \$ 18.000 de los cultivos tradicionales). En promedio, un cultivador de coca podía utilizar en la recolección 4 trabajadores para un trabajo de 3 días y una persona recolectaba en promedio entre 6 y 7 arrobas de hoja durante el día a un promedio de \$ 6.000 por arroba (UNODC, 2010).

Por otra parte, el 91,6% de los productores agropecuarios han tenido como fuente primaria de ingreso del hogar la siembra de coca. No obstante, a medida que el tamaño de las unidades productivas aumenta, empieza a combinar con actividades de tipo agrícola y pecuario. Como fuente secundaria de ingresos del hogar se han encontrado las actividades agropecuarias dentro de la finca, como la agricultura comercial y los pastoreos dedicados a la ganadería extensiva; estas actividades adquieren importancia dentro de la economía del hogar

principalmente en las unidades productivas con extensiones mayores a 3 hectáreas (UNODC, 2010).

Bajo esta premisa, se hace necesario indicar que el negocio del narcotráfico afecta directamente la producción agrícola del departamento, pues los grupos armados promueven el proceso de producción y distribución de narcóticos en sus zonas de dominio, siendo la coca su principal producto. Las altas rentabilidades del narcotráfico, hacen atractivo el negocio y generan que parte de la población se involucre en él. El poder de los grupos ilegales, les permite obligar a la población a apoyarlos en los distintos pasos del proceso de producción y distribución de las drogas. Esto genera aún más distorsiones en el entorno económico regional (Fajardo, 2004).

6. RESULTADOS DIRECTOS E INDIRECTOS

OBJETIVOS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADO / LOGRO OBTENIDO	ANEXO SOPORTES
1. Analizar la dinámica del narcotráfico en el departamento del Meta, desde la perspectiva del área sembrada, la producción y los precios del cultivo de coca, durante el periodo 2000-2015.	Determinar a partir de las variables analizadas la dinámica productiva del cultivo de coca en el Meta.	Se pudo realizar el análisis de las variables y a partir de ellas observar la dinámica productiva y de precios del cultivo de la coca.	Documento tesis – Información secundaria
2. Analizar la relación existente entre el narcotráfico y variables como el desplazamiento forzado y la violencia manifestada esta en acciones de grupos armados al margen de la	Construir un documento en el cual se identifique la relación directa entre el cultivo de la coca con el desplazamiento forzado y el actuar de los grupos al margen de la ley en el departamento del Meta.	Se construyó un documento en el cual se relaciona de manera lógica y ordenada cada uno de las variables a analizar permitiendo contrastar la relación entre el cultivo de la coca y las variables	Documento tesis – Información secundaria

ley.		sociales mencionadas.	
3. Vislumbrar los principales efectos económicos del narcotráfico en cuanto a la concentración de la propiedad rural, el empleo y la producción campesina en el departamento del Meta.	Mostrar a través de la construcción de un documento, los efectos económicos del narcotráfico sobre la tenencia, concentración y uso de la propiedad rural y el empleo en el Meta	Se realizó un análisis de las variables en cuestión, cuyo análisis permitió evidenciar de manera concreta la relación directa entre el narcotráfico y la concentración, tenencia y uso de la propiedad rural y el empleo.	Documento tesis - Información secundaria
4. Presentar algunas recomendaciones relacionadas con reducir el impacto negativo del narcotráfico en el departamento del Meta.	Vislumbrar algunas recomendaciones de orden económico y social con el fin de reducir el impacto negativo del narcotráfico en el departamento del Meta	Presentación de recomendaciones de política pública orientadas a solventar los efectos sociales y económicos del narcotráfico en el Meta	Documento tesis

RESULTADOS INDIRECTOS	COMPROMISO ADQUIRIDO	LOGROS
Trabajo de grado	Pregrado	Ávila, G., Y & Gonzales, C., V. 2017. Análisis de los efectos económicos y sociales del narcotráfico en el departamento del Meta, periodo 2000-2015. Universidad de Llanos. Villavicencio.

6.1.IMPACTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación permite conocer el desarrollo histórico del narcotráfico como economía ilegal y el control económico y social por parte de los grupos irregulares de los territorios donde se producen la coca. Así mismo evidencia los principales efectos directos ocasionados por el narcotráfico en el departamento.

De otro lado, el presente trabajo sirve como documento base para generar políticas públicas en un eventual periodo de posconflicto, cuyas políticas públicas promuevan oportunidades económicas para la población, así como una presencia y oferta institucional sólida y permanente. En este sentido, el presente análisis surge como menester de avanzar en una construcción de paz a través de análisis que permite identificar, recontextualizar y reflexionar sobre los efectos en términos económicos y sociales ocasionados por el narcotráfico durante el periodo 2000-2015 en el departamento del Meta.

6.2.TRANSFERENCIA Y USO DEL CONOCIMIENTO

Aunque el trabajo estrictamente fue pensado como instrumento para alcanzar la titulación profesional en economía, es importante destacar que este constituye una fuente importante de consulta a través de la biblioteca de la Universidad de los Llanos, dado que es un documento que consolida y analiza, en un solo instrumento los datos que en la cotidianidad están dispersos en varias fuentes. Así mismo, se constituye en un instrumento de diagnóstico que le permite a la administración central conocer el estado actual del departamento y el futuro escenario del mismo, en aras de elaborar y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos que beneficien a la población afectada por el narcotráfico en el Meta.

CONCLUSIÓN

Los resultados del presente trabajo indicaron que existe un vínculo estrecho e importante entre el narcotráfico, manifestada está en la siembra de coca, y el conflicto armado, la tenencia y concentración de la tierra, el desplazamiento forzoso, la reducción del PIB agrícola y la estructura productiva en el departamento del Meta. Pues los procesos de concentración de la tierra, conflictos sobre el uso del suelo, las transformaciones en la espacialidad y en el ordenamiento del territorio y la implementación de modelos de empresarización de la producción rural causados por el narcotráfico son correlativos al abandono o desplazamiento de la población y le cambio en la estructura productiva ya que estas termina siendo una estrategia en el marco de la guerra, orientada a la desterritorialización, la expansión de áreas de control y a la apropiación violenta de propiedades agrícolas.

Durante el periodo de estudio el Meta experimentó un alto crecimiento en la producción de cocaína, tendencia que se acentuó desde el año 2006. De hecho, el Departamento fue considerado uno de los principales productores de coca en Colombia, cuya producción y control de cultivos ilícitos ha estado en dominio de los grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares), llegando a convertirse en una de sus principales fuentes de financiación. De los 29 municipios que conforman el departamento de Meta, en 10 se ha observado presencia de cultivos de coca durante el periodo 2001 - 2013. Los municipios que han estado afectados con cultivos de coca durante todo el periodo de estudio son: La Macarena, Uribe, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa.

El análisis de los patrones espaciales tales como la difusión y el contagio entre la producción de coca en los municipios del Meta y la actividad de los grupos armados ilegales, mostraron que existe una fuerte correlación espacial en la producción de coca y la actividad armada ilegal, y que la actividad productiva ilegal a nivel local o municipal se encuentra precedida por la actividad de los grupos armados ilegales. En este sentido, la presencia de cultivos ilícitos se explica por la actividad armada tanto de las guerrillas como de las autodefensas ilegales. Así, se demuestra de forma contundente que una de las principales causas de la expansión de la economía de la coca ha sido el conflicto armado en el departamento del Meta, manifestado principalmente en municipios al sur del departamento como: La Macarena, Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San

Juan de Arama y Vistahermosa, los cuales a su vez presentan altos índices de vulnerabilidad geográfica, económica y social.

Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar la relación entre conflicto armado y narcotráfico durante el periodo 2000-2015, se observó que conforme aumentan los cultivos de coca, aumentan el número de homicidios y desapariciones forzadas en el departamento. De hecho durante el periodo 2002-2006, donde se registró el mayor incremento en hectáreas sembradas de coca (en promedio 69.144 Ha), se registró también el mayor número de homicidios (en promedio 10.167 personas) y desapariciones forzadas (en promedio 711 personas).

Por otra parte, el desplazamiento forzado en el Meta guarda una relación directa con los cultivos de coca y la aspersión o fumigación aérea de dichos cultivos. Esta relación se hizo más evidente a partir de año 2004, en cuyo año se incrementó el cultivo de coca respecto al año 2003 al pasar de 12.814 hectáreas a 18.740 hectáreas sembradas en coca. Dicho incremento ocasiono el aumento de las fumigaciones áreas y un desplazamiento forzado de la población mayor para el año 2005 respecto al año 2004. A partir del año 2006 hasta el año 2014 la reducción en cultivos de coca, - ocasionada entre otras cosa por el incremento acelerado de la aspersión área-, genera una disminución del desplazamiento de la población en el Meta y una reducción de las fumigaciones áreas para años posteriores al 2006. En cuanto al desplazamiento forzado por municipios en el Meta, se observó que específicamente en los municipios ubicados al sur del departamento, se agudiza la situación del desplazamiento, ya que las acciones de las FARC-EP están encaminadas a la disputa con otros grupos armados por el control territorial, debido a que ésta es una zona de fuerte presencia de cultivos ilícitos y de otras rentas ilegales

Así mismo, se evidenció que el cultivo de coca en el Meta genera grandes desigualdades en cuanto a la tenencia y concentración de la propiedad rural, que no solo generan conflictos sociales entre los actores que se configuran en el territorio, sino también se convierten en causal para el hostigamiento de la población y el posterior desplazamiento de la misma. Por otra parte, también comprometen la eficiencia económica, toda vez que la seguridad de la tenencia de la propiedad y la democratización de la misma, se constituye en elementos estratégicos para la producción y el sostenimiento de sistemas productivos y para garantizar la estabilidad de los asentamientos humanos y de sus ingresos.

En este sentido, las disputas por la tierra juegan un papel primordial en medio del conflicto y de la aceleración del narcotráfico. Pues estas son necesarias para el cultivo de bienes agrícolas, pero además son apreciadas por los grupos ilegales. Al alcanzar control territorial, los grupos armados generan zonas de retaguardia y corredores seguros para movilizar tropas, abastecimiento, droga, armas, etc. El amplio poder que han tenido los grupos ilegales en el Meta, les ha permitido apropiarse de grandes extensiones de tierra. Esto es negativo para la producción agrícola, pues junto con la informalidad en los derechos de propiedad, no permite que la tierra sea asignada adecuadamente a los agentes más eficientes.

De otro lado, el probable despojo de tierra, reduce la confianza y sensación de seguridad. Para minimizar las pérdidas ante un posible despojo, los productores conducen la explotación de los predios a un nivel por debajo de su potencial. Adicionalmente, el despojo real de la tierra impide todo tipo de explotación del predio por parte del propietario original. Lo anterior es una clara limitación para la producción agrícola.

Teniendo en cuenta lo anterior, al analizar la violencia (manifestada en presencia y acciones de los grupos armados), el desplazamiento forzoso y el narcotráfico con la producción agrícola en el departamento, se observó que existe una estrecha relación entre estas variables. La intensidad y la naturaleza del conflicto determinan los ataques dirigidos contra la población civil, ya que cuando el conflicto se intensifica, incrementar el número de crímenes contra la población civil se convierte en una estrategia de bajo costo para despejar el territorio, lo cual permite a los grupos armados al margen de la ley fortalecer el control en sus regiones, transportar con facilidad armas y desarrollar actividades ilegales con menores obstáculos. En este sentido, conforme aumentan los cultivos de coca, aumentan los desplazamientos, la violencia y disminuye la producción agrícola en el Meta.

Bajo esta premisa, el narcotráfico le ha representado al departamento del Meta diversos y elevados efectos, los cuales superan con creces los beneficios económicos que eventualmente hubiera podido representar. Aunque desde la perspectiva de corto plazo el narcotráfico ha operado más como un enclave criminal de bajo impacto para el funcionamiento de la economía, a medida que ha transcurrido el tiempo la repatriación de utilidades ha ejercido un efecto persistente y acumulativo sobre la estructura de la propiedad en el Meta, con una secuela adversa para el crecimiento del PIB agrícola y el bienestar de la población. Ya que el cultivo de la coca,

ha impulsado un cambio en la estructura productiva en favor de las actividades informales, de bajo valor agregado, especulativas, por fuera de la base gravable, depredadoras del medio ambiente y, por consiguiente, con bajo impacto sobre el crecimiento y su sostenibilidad. Por otro lado, ha propiciado un cambio en la distribución de la riqueza y del poder en favor de los grupos armados, y de esta forma el narcotráfico se ha constituido en fuente principal de un intenso conflicto social y económico, cuyas expresiones más evidentes han sido la concentración de la propiedad, el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado de la población y una desaceleración del PIB agrícola.

RECOMENDACIONES

Dada la importancia del narcotráfico como generador de implicaciones o impactos negativos en la producción agrícola en el Meta, los resultados realzan la importancia de políticas que logren desvincular al sector agrícola del proceso de producción y distribución de las drogas. En este sentido, se hace imperativo que los diferentes programas y políticas públicas estén encaminados a generar una distribución de la tierra más equitativa y con claridad en los derechos de propiedad. Esto es importante para crear un ambiente seguro y de confianza para los productores, que les permita tener mayor seguridad en sus inversiones de largo plazo.

Específicamente, se hace necesario que en el departamento del Meta, los planes y programas sean dirigidos primordialmente a la zona rural del Ariari en municipio como La Macarena, Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa. Pues por una parte, esta es una zona donde la población rural ha sido vulnerada por el conflicto armado, ya que durante años ha sido territorio de las FARC-EP; y por otra, la región del Ariari es una zona del Meta fundamental para el desarrollo productivo a nivel regional y nacional. Bajo esta premisa, las autoridades del gobierno departamental y municipal, deben discutir sobre la importancia de llevar los beneficios de planes, programas y políticas sociales y económicas a las zonas apartadas del Meta, y deben establecer los pasos a seguir, para que estos beneficios se garanticen con altos estándares de calidad y de manera equitativa; lo anterior, con el fin de lograr una mayor movilidad social y una mejor calidad de vida de la población rural metense, pues la inversión social y económica juegan un papel crítico en la disminución de los efectos del narcotráfico.

En este sentido, es preponderante asegurarle al productor campesino no solo una infraestructura vial, de salud, educativa y de recreación que haga sostenible su calidad de vida en su territorio, sino que también es necesario garantizar una protección en el mercado de tierras para evitar la pérdida del mismo en medio de un contexto de asimetrías comerciales frente a las inversiones del gran capital. En este contexto, no se puede aceptar, al contrario, se deben tomar medidas de política pública social y económica para evitar a toda costa que los procesos de formalización faciliten la concentración de la propiedad de la tierra.

Por otra parte, es necesario proteger la mano de obra del sector rural y procurar que esta se dirija a la producción de cultivos lícitos, que sean promisorios y de rentabilidad, con el fin de disminuir la incursión de la mano de obra campesina y familiar en el cultivo de coca. Lo anterior generaría efectos positivos en la productividad agrícola, dada la vital importancia de la mano de obra en la agricultura.

De otro lado, después de hacer un repaso por la magnitud del desplazamiento, la tenencia de la tierra, la violencia armada y sus relaciones con los cultivos de coca, surge una primera cuestión que debe ser tomada en cuenta en la gestión pública en el Meta; debe considerarse el desplazamiento forzado y la confrontación armada como síntomas de una crisis humanitaria que afecta en particular al sector rural, a la producción agrícola y a las estructuras de tenencia de la propiedad en el departamento. Pues el desplazamiento forzado, consecuencia del conflicto armado y los cultivos ilícitos, ha deteriorado las condiciones de vida de un grupo significativo de la población. La migración forzada ocasiona pérdidas sustanciales de activos a sus víctimas y un deterioro de su bienestar económico y las consecuencias en el largo plazo pueden ser devastadoras.

Bajo este contexto, es necesario que en el departamento del Meta, los planes y programas en materia de infraestructura social sean dirigidos a atender las necesidades o requerimientos básicos de la población desplazada. En este sentido, las autoridades del gobierno departamental y municipal, deben discutir sobre la importancia de llevar estos servicios sociales a las zonas afectadas por el desplazamiento en el Meta, y deben establecer los pasos a seguir, para que estos servicios se garanticen con altos estándares de calidad y de manera equitativa; lo anterior, con el fin de lograr una mayor movilidad social y una mejor calidad de vida de la población víctima del desplazamiento, pues la infraestructura social juega un papel crítico en la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la equidad.

Finalmente, es imperativo que la elaboración y ejecución de las diferentes políticas públicas en torno a la reducción de los efectos generados por el narcotráfico en el Meta, tenga en cuenta la representación de la población víctima como actores políticos frente a las instituciones e instancias de toma de decisiones, y no sólo como un actor social, dispuesto a sumarse a las

prioridades de las políticas de turno. Se hace necesario entonces que la administración departamental fomente la participación de las comunidades más vulnerables, en torno no solo a la identificación de sus necesidades, sino en torno al desenvolvimiento como agentes económicos, sociales y políticos.

REFERENCIAS

- Belzner, J. y Rodríguez, A. (2010). Impacto económico y social del narcotráfico en Colombia de 1980-1995 y sus costos derivados. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de Economía. . [Versión en línea]. Recuperado el 09 de noviembre de 2016 de: <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/11851/10001272.pdf?sequence=2>.
- Cartay, R. “Control de la cocaína: ¿represión o legalización?”, Revista de Economía 9, 1994, pp. 7-14.
- DNE (2009). Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008, informe final. Bogotá
- Días, M. y Sánchez, F. (2004). Geografía de los cultivos ilícitos y conflicto armado en Colombia. Documento CEDE 2004-18. Universidad de los Andes. (Edición Electrónica). [Versión en línea]. Recuperado el 11 de noviembre de 2016 de https://economia.uniandes.edu.co/assets/archivos/Documentos_CEDE/D2004-18.pdf.
- Díaz-Piedrahita, S. (1998). El medio ambiente colombiano y los cultivos ilícitos. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias, 22(83), 173-183.
- Fundación Ideas para la paz (2013). Dinámicas del conflicto armado en el Meta y su impacto humanitario. [Versión en línea]. Recuperado el 11 de noviembre de 2016 de <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/511>
- Fajardo, D. (2004). El conflicto armado y su proyección en el campo. [Versión en línea]. Recuperado el 10 de mayo de 2017 de www.plagios.org/wp.../Anexo-4.-El-conflicto-armado-en-Colombia.-Fajardo-2004.pdf
- Gutiérrez, O., (2005). Desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta 1982- 2004. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. Bogotá.
- Hernández, Sampieri Roberto, Fernández C. Baptista L. P. (2003): “Metodología de la Investigación”. Ed. Mc Graw Hill. Chile.

Ibáñez, A. M. & Querubín, P. (2004). Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia, Documento CEDE No. 23.

Ibáñez, L., A. (2008). El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza, Bogotá, D. C., Colombia. Editorial Kimpres Ltda. Primera edición. [Versión en línea]. Recuperado el 02 de mayo de 2017 de:
<https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/47/Libros/811/el-desplazamiento-forzoso-en-colombia-un-camino-sin-retorno-hacia-la-pobreza>

Ibáñez, A.M. y C.E. Vélez (2003b). Distribución desigual de las responsabilidades de atención a la población desplazada entre los municipios Colombianos.

Llano, N., (2015), Análisis del impacto del narcotráfico de cocaína y de sus efectos colaterales sobre el crecimiento económico de Colombia para el periodo 1980-2011.

Quino, J. y Arcila, Adriana. (2004). Inventario y valoración de los efectos económicos de la producción y venta de drogas ilícitas en Colombia. Universidad de Manizales. Versión en línea]. Recuperado el 09 de noviembre de 2016 de:
<https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72537/Quinarci.pdf>.

Melo, J. (s.f). Narcotráfico y democracia: la experiencia colombiana. Bogotá. [Versión en línea]. Recuperado el 09 de noviembre de 2016 de:
<http://www.jorgeorlandomelo.com/narcotrafico.htm>

Ortiz, C. H. (2009). La desaceleración económica colombiana: Se cosecha lo que siembra. Revista de Economía Institucional, Vol. II, N° 21, pp. 107-147. Bogotá, Universidad Externado de Colombia. [Versión en línea]. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de:
<http://www.economiainstitucional.com/pdf/No21/cortiz21.pdf>.

Prades, N. (2015). Análisis del impacto del narcotráfico de cocas y de sus efectos colaterales sobre el crecimiento económico de Colombia para el periodo 1980-2011. Universidad del Valle. [Versión en línea]. Recuperado el 10 de noviembre de 2016:
bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8480/1/0508849-E-P-15.pdf

PNUD (2015). Meta: Análisis de la conflictividad. [Versión en línea]. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 de:

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/COL/00058220_Analisis%20conflictividad%20Meta%20PDF.pdf.

Puyana, A. M. (1999), “Cultivos ilícitos, fumigación y desplazamiento en la Amazonía y la Orinoquía”, en Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales, eds., F. Cubides y C. Domínguez. Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional y Ministerio del Interior, Bogotá.

Pérez, L. E. (2002). “Desplazamiento forzado en Colombia, 1995-1999: una aproximación empírica a las relaciones entre desplazamiento, conflicto armado y desarrollo”, en El desplazamiento forzado en Colombia: compromisos desde la universidad. Bogotá.

Reyes, A. (1994). Territorios de la violencia en Colombia, El agro y la cuestión social. Ministerio de Agricultura y Tercer Mundo Editores. Bogotá.

Rocha, R. (2000). La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico. Bogotá: UNDCP y Siglo del Hombre Editores. [Versión en línea]. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de: http://www.academia.edu/8841398/La_econom%C3%ADa_colombiana_tras_25_a%C3%B1os_de_narcotr%C3%A1fico.

Rocha, R. (2001). Antecedentes y perspectivas del narcotráfico en Colombia: Una mirada a las políticas. Problemas del desarrollo, 32 (126), 59-108. [Versión en línea]. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de: <http://www.redalyc.org/pdf/118/11820094004.pdf>.

Rocha, R. (2011). Las nuevas dimensiones del narcotráfico en Colombia. República de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho. [Versión en línea]. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de: www.ispionline.it/it/documents/T.R.Mafie.Rocha.19.11.pdf

Ramírez, M. C. (2001). Entre el Estado y la guerrilla: Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo. Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Colciencias.

- Rocha, R., & Ramírez, M. C. (2005). Impactos de la economía de las drogas ilícitas: estudio de caso colombiano. Resumen del informe final. USAID
- Salazar, B. y L. Restrepo. “Intimididades letales: la evolución de una red de tráfico de droga local”, *Desafíos* 23, 2, 2011, pp. 197-222.
- Raffo L. Y Segura, J. (2015). Las redes del narcotráfico y sus interacciones: un modelo teórico. *Revista de Economía Institucional*, vol. 17, n. ° 32, primer semestre/2015, pp. 183-212. [Versión en línea]. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 de <http://www.economiainstitucional.com/esp/vinculos/pdf/No32/lraffo32.pdf>.
- UNODC (1989). Boletín de Narcóticos. [Versión en línea]. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 de: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1989-01-01_1.html.
- UNODC (2006). Características agrícolas de los cultivos de coca en Colombia. Versión en línea]. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 de: <http://www.biesimci.org>.
- UNODC (2008). Elementos orientadores para las políticas públicas sobre drogas en la subregión. Primer estudio comparativo sobre consumo de drogas y factores asociados en población de 15 a 64 años. Versión en línea]. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 de: http://www.cicad.oas.org/oid/NEW/Research/comparativo_subregional-2008-06.pdf
- UNODC (2010). Reporte de drogas mundial 2010 WorldDrugReport 2010. Viena: Naciones Unidas. [Versión en línea]. Recuperado el 15 de noviembre de 2016 de: <http://www.unodc.org/unodc/index.htm..>
- Urrutia, Miguel (1990): Análisis costo beneficio del tráfico de drogas para la economía colombiana. Bogotá. [Versión en línea]. Recuperado el 09 de noviembre de 2016 de: <http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2365>